

Capítulo III

La sociedad civil después del diluvio neoliberal

Atilio A. Boron

El presente capítulo consta de cuatro partes. En la primera se exploran el significado de la democracia y la ciudadanía, y su convulsionada relación con las estructuras de dominación inherentes a las sociedades capitalistas. En la segunda se aportan antecedentes acerca del impacto de la recesión y los ajustes de inspiración liberal sobre las condiciones de vida de las clases y capas populares en América Latina. En la tercera, se formulan algunas apreciaciones acerca de la validez empírica y consistencia lógica de algunas de las propuestas centrales de la ortodoxia neoliberal. En la cuarta, por último, se plantean algunas reflexiones sobre el tipo de sociedad civil resultante del diluvio neoliberal.

Introducción: ciudadanía y cuestión democrática en América Latina¹

La incompleta y relativamente precaria democratización de los regímenes políticos latinoamericanos vino acompañada por una reapertura del debate acerca del significado actual de la democracia. Pocas veces podría un tema como éste haber sido más oportuno en un continente que como más de una vez lo recordara Agustín Cueva en sus casi dos siglos de vida independiente no conoció una sola revolución burguesa que hubiera culminado en la instauración de un régimen democrático estable. Revoluciones burguesas hubo algunas, es cierto: en México en 1910 1917, en Guatemala en 1944, en Bolivia en 1952, y hasta en el Brasil a partir de 1964. Pero ninguna de ellas concluyó sus “tareas pendientes” estableciendo un régimen democrático: su preocupación, antes bien, fue afianzar el funcionamiento del modo de producción capitalista, no introducir a la democracia burguesa. Su móvil y su objetivo era la implantación del capitalismo, no de la democracia. La impronta autoritaria del capitalismo latinoamericano tiene pues raíces muy profundas, que se hunden en nuestro pasado colonial y en la modalidad reaccionaria y dependiente con la cual nuestras sociedades se integraron al capitalismo mundial².

En todo caso, hacia comienzos de los años ochenta América Latina parecía dispuesta a intentar, una vez más, organizar su vida pública en consonancia con los preceptos democráticos. Esta tendencia fue reforzada por el hecho de que, desde mediados de los años setenta, el impulso democrático comenzó a dejarse sentir con una fuerza sin precedentes en la historia de la humanidad. Nunca como entonces hubo tantas naciones que acometieron la empresa de transformar su régimen político según las reglas del juego democrático.

Impresionados por estos acontecimientos, algunos teóricos, como Samuel P. Huntington, han creído ver en ellos la manifestación de una suerte de “tercera ola democrática”³. Como producto tanto de esta marejada democrática como de aquello que Norberto Bobbio denominara “las duras réplicas de la historia” y que incluye tanto el fenomenal fracaso del socialismo stalinista, padecido por la URSS y los países del Este europeo, como la completa inoperancia de las fórmulas socialdemócratas tradicionales para “superar” al capitalismo, un segmento importante de la izquierda latinoamericana adhirió a una concepción ingenuamente optimista y “facilista” de la democracia, que reposa sobre dos supuestos: (a) el carácter presuntamente lineal e irreversible de los progresos democráticos, algo que, por ejemplo, un conservador lúcido y realista como Huntington se niega terminantemente a admitir; (b) la creencia, teóricamente errónea e históricamente falsa, de que la democracia es un proyecto que se agota en la sola “normalización” de las instituciones políticas. La empresa dramática de instaurar la democracia se reduce así a la creación e institucionalización de un puro orden político es decir, un sistema de reglas del juego que hace abstracción de sus contenidos éticos y de la naturaleza profunda de los antagonismos sociales y que sólo plantea problemas de gobernabilidad y eficacia administrativa⁴. Asombra comprobar cómo algo que parece a primera vista tan sencillo y razonable según estos autores haya podido despertar a lo largo de la historia pasiones tan desbordantes, precipitado resistencias tan encarnizadas, y provocado en los más diversos tipos de sociedades revoluciones y contrarrevoluciones, sangrientas guerras civiles, prolongadas luchas reivindicativas y salvajes represiones. ¿Habría sido todo a causa de un simple malentendido, o será que la implantación de la democracia es la coagulación de un

determinado resultado de la lucha de clases, y como tal está muy lejos de ser un simple trámite administrativo? Ateniéndonos a la experiencia histórica del Brasil podríamos decir que fue muchísimo más sencillo conseguir la abolición de la esclavitud y producir la caída del imperio que alcanzar la democracia burguesa.

En todo caso, y sin entrar a considerar un tema que escaparía de los límites del presente trabajo, conviene tomar nota de las perniciosas implicaciones teóricas y político ideológicas de este triunfo contundente de las concepciones schumpeterianas que reducen la democracia a una cuestión de método, disociado por completo de los fines, valores e intereses que animan la lucha de los actores colectivos a expensas de las formulaciones clásicas. En éstas, la democracia es tanto un método de gobierno como una condición de la sociedad civil, caracterizada por el predominio de la igualdad y por la existencia de una categoría social especial: los ciudadanos, cuya definición excede los marcos meramente formales y remite a características sociológicas y económicas bien especiales. Ninguna discusión sobre el futuro de la democracia encarada por los socialistas a finales del siglo XX puede ignorar este parámetro fundamental⁵. Una vez más Agustín Cueva estaba en lo cierto cuando prevenía en contra de esta tendencia a considerar a la democracia como una categoría exclusivamente “política”. Esta definiría un tipo específico de relaciones entre el Estado y la sociedad civil caracterizado por la existencia de la libertad, el pluripartidismo, las elecciones periódicas y el imperio de la ley cuya efectividad democrática, se supone, está apriorísticamente garantizada cualesquiera sean sus condiciones concretas de existencia. De ahí que este malogrado autor concluyera que estas reglas del juego democráticas:

... en sí mismas me parecen positivas, pero con la salvedad de que nunca funcionan de manera indeterminada, o sea, con independencia de su inserción en cierta estructura más compleja que es la que les infunde una y otra “orientación”⁶.

Siendo esto así, una reflexión sobre nuestras nacientes democracias no puede hacerse sobre la democracia en general. Esta es inconcebible al margen de un análisis sobre la estructura y dinámica del capitalismo latinoamericano y, más detalladamente, sobre la naturaleza de los procesos de ajuste estructural y refundación capitalista actualmente en curso en nuestra región. En otras palabras, no tiene demasiado sentido hablar de la democracia en su abstracción cuando en realidad de lo que se trata es de examinar la forma, condiciones y alcances de la democratización en sociedades, como la capitalista, que se fundan en principios constitutivos que le son irreconciliablemente antagónicos. Esto en nada subestima la trascendencia de la democracia como forma de gobierno y como modo de vida, sobre todo después de los ríos de sangre que corrieron en América Latina para conquistarla. Pero su necesaria valoración no puede ignorar que en su concreción histórica a la democracia tanto en la periferia del capitalismo como en su núcleo más desarrollado siempre se la encuentra entrelazada a una estructura de dominación clasista, la cual impone rígidos límites a sus potencialidades representativas y, en mayor medida todavía, a las posibilidades de autogobierno de la sociedad civil. La democracia de la Atenas clásica no disolvía por el hechizo de las palabras las relaciones de dominación que caracterizaban al esclavismo del mundo antiguo. El ascenso de Pericles no fue suficiente para que los amos se convirtieran en esclavos o para que éstos se emanciparan. Del mismo modo, la democratización del capitalismo no basta para que las arraigadas estructuras de dominio sobre las cuales reposa y de las cuales depende vitalmente se esfumen como resultado del sufragio universal y la representación política. Por lo tanto, la adecuada ponderación de estas relaciones requiere sortear dos escollos, que son las Scilla y Caribdis en donde naufragan muchos análisis: por un lado, el reduccionismo economicista, que disuelve la especificidad de la política en las leyes de movimiento del capital. A consecuencia de esto la dictadura y la democracia burguesa se convierten en distinciones irrelevantes: Augusto Pinochet es lo mismo que Olof Palme y Raúl Alfonsín es igual a Jorge R. Videla. El error simétrico al reduccionismo economicista se encuentra en las concepciones, hegemónicas en las ciencias sociales, que fragmentan y descomponen la realidad social, reificando a sus “partes” como si ellas pudieran existir independientemente de la totalidad a la que pertenecen y que les da sentido. Se habla de democracia “a secas” cuando en realidad estamos hablando de “capitalismos democráticos”, en donde lo sustantivo es el capitalismo y lo adjetivo la democracia⁷.

La inesperada “resurrección” de la sociedad civil en América Latina, un fenómeno que en el

Brasil adquirió una intensidad extraordinaria desde los tiempos de las *direitas* já!, obligó a recolocar radicalmente los términos de la cuestión democrática. ¿Por qué? Sencillamente porque en su formulación convencional ésta no trascendía las fronteras del orden político. El discurso tradicional de la democracia permanece encerrado en la arquitectura formal del Estado y el sistema representativo, excluyendo de su horizonte de visibilidad todo aquello que las limitaciones de la ideología burguesa condena al limbo de la esfera “extra política”. A pesar de sus evidentes limitaciones esta perspectiva es la que, todavía hoy, predomina en los planteamientos teóricos del mainstream de la ciencia política norteamericana. En otras palabras, no se franquea el hiato que el joven Marx había identificado como una “falla estructural” en la tradición liberal democrática que separa artificiosamente al bourgeois del citoyen⁸. En esta concepción la democracia remite al segundo y se desentiende de la suerte y la inserción estructural del primero: para la teoría liberal burguesa de la democracia es irrelevante si el ciudadano en cuestión es un propietario o un proletario. Es que la premisa silenciosa de todas las elaboraciones que arrancan de la matriz lockeana es que sólo el propietario puede aspirar a la ciudadanía. Como producto del peso que sigue teniendo este supuesto, gran parte de las contribuciones recientes producidas al interior de esta tradición doctrinaria tienen un inconfundible sabor de “fantasía”. Se admite sin discusión, por ejemplo, que las democracias latinoamericanas tienen ciudadanos algo que habría que ver hasta qué punto y en qué proporción es cierto en cada país ⁹; o se formulan juicios abstractos sobre “la democracia” y sus problemas que parten del supuesto, casi nunca explicitado, de que ésta funciona en Argentina, Brasil o Chile ni se diga en Haití, Guatemala o Honduras del mismo modo que lo hace en los países escandinavos. No es una mera casualidad que términos cruciales para el estudio de las democracias capitalistas en el mundo desarrollado tales como *governmental accountability* o *responsiveness*, por ejemplo carezcan de traducción literal en lengua castellana y en portugués. Es que, hasta fechas muy recientes, eran vocablos innecesarios: la experiencia práctica de los pueblos iberoamericanos no suscitaba la necesidad de crear tales palabras¹⁰.

La irrupción de las masas en el Estado capitalista hizo inevitable la reformulación de la cuestión democrática. A raíz de esto la tradicional concepción “garantista” y exclusivista que había predominado hasta la Primera Guerra Mundial con su fuerte impronta formalista reveló todas sus insuficiencias. Esto no significaba, naturalmente, que los viejos principios codificados por el constitucionalismo liberal burgués del siglo XVIII y XIX hubieran perdido su valor, transformándose de la noche a la mañana en desdeñables “formalidades”. Le cupo a Rosa Luxemburgo el honor de haber sido quien, con singular agudeza, reconoció que aquellas libertades, derechos y garantías individuales apostrofadas por su supuesta condición de “burguesas” seguían siendo condiciones necesarias si bien no suficientes para la construcción de una democracia socialista. Su opción revolucionaria no la hizo sucumbir ante la tentación que tantos estragos hiciera en la izquierda de denostar a la democracia burguesa por ser exclusivamente “formal”¹¹. La validez de la crítica socialista a las inconsistencias de un régimen cuyos predicados igualitaristas y democráticos son incongruentes con sus premisas prácticas clasistas y autoritarias sigue siendo aún hoy irrefutable. Véase si no el desolador panorama de nuestras democracias, manteniéndose precariamente de pie sobre sociedades estructuralmente injustas, que condenan cada día a miles de personas a la marginalidad y el desamparo. Claro está que, siguiendo a Rosa Luxemburgo, es vital comprender que el argumento de la democracia socialista nada tiene que ver con la codificación que éste sufriera a manos del estalinismo. En la vulgata pseudomarxista se procedía sin más trámite a la cancelación de esas libertades “formales” pretextando su carácter irreductiblemente burgués, ¡como si el *habeas corpus*, la libertad de expresión y asociación o el *majority rule* fuesen antagónicos con la teoría y la práctica política de las clases populares! ¿O es que, tal como correctamente se preguntara Norberto Bobbio, una asamblea de obreros elige sus representantes por el voto calificado de sus miembros, o apelando a un principio teocrático?¹² Rosa Luxemburgo, por el contrario, acertadamente sostenía que la democracia socialista exigía la más rotunda ratificación y extensión de esas libertades formales sólo en apariencia mediante la democratización “sustantiva” de la fábrica, la escuela, la familia; en fin, del conjunto de la sociedad¹³.

Todo lo anterior plantea por lo menos dos problemas que, dada su envergadura, apenas si nos limitaremos a enunciar. Primero, ¿hasta qué punto la plena democratización del Estado capitalista es capaz de suturar el hiato entre la igualdad “celestial” que proclama el régimen

político y la desigualdad “material” que reproducen incesantemente las relaciones burguesas de producción? Es obvio que el proyecto de un capitalismo democrático tropieza con escollos insalvables, de naturaleza estructural. ¿Es solucionable la contradicción entre democratización política y autocracia económica? No parece; al menos, no hay casos históricos que avalen respuestas afirmativas. Lo que sí han habido son “compromisos” que cabalgan sobre esta contradicción y atenúan sus aspectos más desestabilizantes: no es otro el significado que tienen la democracia burguesa y el Estado keynesiano de bienestar. Pero el “compromiso de clases” no cancela el antagonismo clasista¹⁴. No pueden subestimarse los adelantos políticos experimentados por el capitalismo democrático desde la Primera Guerra Mundial, ni minimizarse los alcances del Estado keynesiano de bienestar desde los años treinta. Impulsados por las luchas populares los capitalismos democráticos debieron consentir la introducción de una serie de reformas que beneficiaron objetivamente a las clases subalternas. Sin embargo, es imposible negar que estos desarrollos tropezaron con los límites inflexibles del despotismo del capital en el decisivo terreno de la producción. El impulso reformista se detuvo en las puertas de las fábricas y los bancos.

Pero siendo esto así surge inmediatamente la segunda cuestión: ¿es posible concebir el tránsito desde una democracia capitalista a una democracia socialista, o “pos capitalista”, como un deslizamiento gradual y sin rupturas entre dos polos de un mismo eje? El paso de la una a la otra, ¿es simplemente una cuestión acumulativa, o implica un salto cualitativo? La respuesta en ambos casos es negativa, y la experiencia histórica enseña que el posible tránsito desde una democracia capitalista a otra de tipo socialista o, al menos, “poscapitalista” -es impensable sin replantear simultáneamente el tema de la mutación radical en la estructura de la sociedad, es decir, el tema (tabú en tiempos neoliberales) de la revolución. En consecuencia, sólo podría hablarse de la profundización de la democracia luego de haber formulado alguna hipótesis verosímil sobre la estabilidad a largo plazo de la sociedad capitalista; y para conjeturar los itinerarios de un eventual tránsito hacia alguna forma de democracia “pos capitalista” se requeriría similarmente poder esbozar algunas hipótesis en torno a los factores que precipiten la descomposición del capitalismo contemporáneo.

En síntesis: los problemas objetivos y concretos que acosan la marcha de la democracia en América Latina trascienden holgadamente aquellos referidos a la exclusiva mecánica del régimen político. Permanecer encerrados en una concepción “politicista” de la democracia obnubila nuestra visión y nos instala en un universo ficcional que no guarda correspondencia con los procesos reales y concretos que conmueven a nuestras sociedades. La prueba de que la democracia no puede ser concebida en un sentido “politicista” y suprahistórico viene dada por el hecho de que lo que satisfacía al idealismo democrático en la Grecia clásica, en las ciudades libres del medievo europeo o en la civilización surgida con el advenimiento de la modernidad y el industrialismo constituye hoy en día nada más pero también nada menos que la plataforma histórica desde la cual los pueblos pugnan por nuevas y más fecundas formas de participación y de construcción del poder político. Si a comienzos del siglo XX la democracia podía excluir del sufragio a la mujer, en la segunda mitad del mismo ninguna democracia puede reivindicarse como tal sin la plena participación de la mujer en la vida política. Del mismo modo, la democracia “protectora” de los derechos individuales, o del “individualismo posesivo”, para usar las consagradas expresiones de C. B. Macpherson, requiere hoy para no caer en el anacronismo- de nuevos contenidos de tipo económico y social que al igual que el sufragio femenino ya constituyen un componente fundamental de la doctrina democrática. El problema es que este cúmulo de nuevos derechos y entitlements, así como la concepción expansiva y participativa de la democracia que fluye de ellos, son tendencialmente incompatibles con la sociedad capitalista¹⁵.

Por consiguiente, el desafío que enfrentan las sociedades latinoamericanas va mucho más allá de asegurar la restauración de formas políticas congruentes con los principios fundamentales del régimen democrático. Aparte de eso -una tarea ya de por sí tan extenuante como el trabajo de Sísifo los nuevos gobiernos deben también demostrar que la democracia es una herramienta eficaz para asegurar la transformación social y la construcción de una “buena sociedad”. La agenda de la democracia en América Latina no puede estar más recargada: pobreza extrema, enfermedad, analfabetismo, desempleo, decadencia regional y urbana, narcotráfico. ¿Pueden las nuevas democracias ignorar la fenomenal “deuda social” que este continente viene acumulando desde tiempos inmemoriales?

“Ajustes neoliberales”, pobreza y ciudadanía democrática

La derechización del clima ideológico y político de Occidente en los ochenta trajo consigo un doble movimiento: por una parte, una supersticiosa exaltación del mercado, cerrando los ojos a los resultados catastróficos que su autónomo funcionamiento había producido en el pasado hasta desembocar en la Gran Depresión de 1929- y absolviéndolo piadosamente de sus culpas. Por la otra, una recíproca satanización del Estado como causante de todas las desgracias e infortunios que, de distinta manera, afectaron a las sociedades capitalistas. No es precisamente una casualidad que la crítica al Estado haya comenzado a arreciar cuando los estados capitalistas de América Latina inician una nueva etapa democratizadora. Bajo estas circunstancias, el auge de los planteamientos neoliberales que configuran el Consenso de Washington ha convertido al Estado en la bete noire que hay que combatir si es que nuestros países quieren arribar, algún día, a los diáfanos cielos del desarrollo. Cualquiera mínimamente familiarizado con la historia económica de las sociedades capitalistas, sea del centro como de la periferia, sabe muy bien que esta formulación es insostenible a la luz de la evidencia empírica. Recordemos simplemente lo siguiente: en la década del '60 las economías latinoamericanas de ese entonces, fulminadas ahora por su estatismo, crecieron a una tasa anual del 5,7%, y en la década siguiente, a pesar de los problemas derivados de la crisis del petróleo y la recesión en los países industrializados, lo hicieron al 5,6%. En los neoconservadores '80, cuando las políticas ortodoxas prevalecieron casi sin contrapeso, la tasa de crecimiento fue de tan sólo el 1,3%, que se transforma en negativa al tomarse en cuenta el crecimiento de la población¹⁶. El camino neoliberal hacia el Primer Mundo, por lo tanto, no es otra cosa que un mito, hábilmente manejado por las clases y fracciones que actualmente detentan la hegemonía en el sistema capitalista internacional. Los resultados de esa política pueden verse con toda nitidez en el caso de los Estados Unidos, donde la ortodoxia neoliberal de Reagan obró el milagro de hacer que en pocos años la mayor economía del mundo se transformase ¡del principal acreedor del planeta en el primer deudor del orbe! Sin embargo, y pese a esta evidencia, los pregoneros de las bondades del ajuste neoliberal en América Latina prosiguen impertérritos con su prédica, y sus imponentes aparatos de hegemonía han transformado este verdadero nonsense en el sentido común de nuestras sociedades.

La hegemonía ideológica del neoliberalismo y su expresión política, el neoconservadurismo, adquirieron una desacostumbrada intensidad en la América Latina. Uno de sus resultados ha sido el radical debilitamiento del Estado, cada vez más sometido a los intereses de las clases dominantes y resignando grados importantes de soberanía nacional ante la superpotencia imperial, la gran burguesía transnacionalizada y sus “instituciones” guardianas: el FMI, el Banco Mundial y el régimen económico que gira en torno a la supremacía del dólar. Por otra parte, a la crisis estructural del Estado su raquitismo y regresividad tributarias, la irracionalidad del gasto, la sangría de la deuda externa, su hipertrofia burocrática se le añade un discurso ideológico autoincriminatorio que iguala todo lo estatal con la ineficiencia, la corrupción y el despilfarro, mientras que la “iniciativa privada” aparece sublimada como la esfera de la eficiencia, la probidad y la austeridad. Estas imágenes dicotómicas de lo “público” y lo “privado” no resisten el menor análisis, aunque sea por el hecho elemental de que la otra cara de la corrupción y la ineficiencia del “estatismo” es el empresario privado que corrompe al funcionario estatal. En todo caso, la amalgama de la crisis estructural del Estado con el discurso satanizador del sector público ha disminuido la capacidad de éste para formular y ejecutar políticas. La burguesía que en el pasado apoyó su acumulación privada en la gestión estatal y las políticas keynesianas hoy se desvive por amputarle al Estado todas sus capacidades regulatorias. Su estrategia de dominación articulada en los diferentes escenarios nacionales con la de las fracciones hegemónicas del capital imperialista ha sido facilitada por el fenomenal retroceso experimentado por el movimiento obrero a escala planetaria. Esta situación ha precipitado una ofensiva sin precedentes destinada a desandar el camino iniciado con la Gran Depresión de 1929, desplazando el centro de gravedad de la relación Estado mercado en dirección de este último: de ahí la oleada de desregulaciones, liberalizaciones, aperturas indiscriminadas de los mercados, y las privatizaciones mediante las cuales los capitalistas se hicieron de las empresas estatales y de los servicios públicos más rentables.

Como resultado de todo lo anterior los capitalistas locales y sus socios metropolitanos

obtuvieron varias ventajas: primero, reforzaron de manera considerable su predominio económico, reduciendo drásticamente el control público de los recursos nacionales y facilitando el accionar del sector privado. Segundo, algo muy importante para el gran capital financiero internacional y de lo cual se habla muy poco: garantizaron (al menos hasta ahora) el pago de la deuda externa, destinando a tales efectos recursos y propiedades de carácter público otrora “intocables”; tercero, modificaron a su favor, y de manera decisiva, la correlación de fuerzas entre el mercado y el Estado, condicionando de este modo los grados de libertad que pudiera tener algún futuro gobierno animado por una vocación reformista o transformadora. Ante este panorama no caben dudas: tal vez la tarea más urgente con la que se deban enfrentar los países de América Latina una vez agotado el diluvio neoliberal será la reconstrucción del Estado.

a) La cruzada “privatista”

La fusión de la crisis fiscal con el discurso auto incriminatorio del Estado que propagan los voceros del neoliberalismo ha impulsado a diversos gobiernos de la región a adoptar políticas tan salvajes como imprudentes y, en algunos casos, altamente corruptas de desmantelamiento de agencias y empresas estatales o paraestatales, cuyos resultados, en términos de la provisión de bienes públicos, son hasta ahora francamente negativos. La “muerte súbita” del Estado constituye una asombrosa novedad, por cuanto pone de relieve la pendular reversión de una tendencia muy pronunciada en los sesenta y en los setenta, y que tuvo como consecuencia el reforzamiento del Estado en casi todos los países de la región. Una somera revisión de la literatura de la época demuestra que el Estado se había transformado en un componente central del famoso “trío” dominante junto con las burguesías “interiores” y el capital monopólico transnacional en los estados burocráticos autoritarios y las dictaduras militares de nuevo tipo que, por aquellos años, se enseñorearon de la región¹⁷. Si bien su poderío no podía equipararse al que caracterizaba al “socio principal” de esta alianza, el capital transnacional, la pujanza de las estructuras estatales, la diversidad de empresas de distinto tipo que poseía y administraba, y el enorme volumen de sus operaciones, hicieron del Estado un agente económico y político de primer orden. Además, éste no sólo podía dictar ciertas condiciones a las burguesías locales sino que, en algunos casos, pudo negociar con el capitalismo metropolitano desde una posición que le permitió como en Brasil, México, en parte Venezuela introducir estrictas regulaciones a sus negocios e, inclusive, dictar leyes de nacionalización de firmas extranjeras. Basta recordar, para calibrar la magnitud de las transformaciones experimentadas en estos años, que la problemática de aquella época era la de las nacionalizaciones, mientras que hoy en día la voz de orden es la de las privatizaciones. No hace mucho se diseñaban proyectos de expansión del sector público y las empresas estatales, hoy en día la ortodoxia dominante aconseja “achicar” el Estado, rematar sus empresas para fortalecer el sector privado de la economía, y nuestros gobiernos están actuando con la furia y el dogmatismo de los conversos- en función de estas nuevas ideas. Esta violenta oscilación en el “clima ideológico” del capitalismo tiene, sin dudas, enorme significación desde el punto de vista de las capacidades efectivas del Estado para intervenir en la vida económica. El “papel rector” que se le asignaba en la ideología desarrollista de la posguerra ha sido significativamente recortado; sus recursos y su capacidad para ejecutar una política económica soberana también. En consecuencia, sus posibilidades de regular los mercados, neutralizar los efectos desquiciantes del ciclo económico y producir los satisfactores sociales que requiere la población se han visto tajantemente menoscabados.

Entiéndase bien: no estamos proponiendo que la izquierda latinoamericana se embarque en una dogmática apología del modelo estatal vigente en el antiguo régimen social de acumulación. Aquel era un Estado que, visto desde la perspectiva de hoy, ciertamente aparece como sobredimensionado, involucrado innecesariamente en una infinidad de jurisdicciones y marcado por profundas tendencias deficitarias. Un Estado que, sin dudas, servía más para satisfacer las necesidades y los intereses de las clases dominantes que los de las clases y capas subordinadas. Sin embargo, dada la naturaleza “estadocéntrica” del viejo patrón de acumulación capitalista, este sesgo clasista no le impidió desempeñar un relevante papel desde la segunda posguerra hasta la crisis del petróleo: tal como decíamos más arriba, las economías latinoamericanas crecieron a un promedio anual superior al 5,5% y un vigoroso proceso de industrialización transformó radicalmente nuestras sociedades. Además, al amparo

de ciertas coyunturas políticas, el impulso de las luchas populares hizo que el “Estado intervencionista” adoptase políticas que redistribuyeran moderadamente ingresos y riquezas, integrase políticamente a las capas y clases populares, y se les proveyera de ciertos bienes y servicios salud, educación, vivienda, agua potable, transportes, una legislación social, etc. a los cuales probablemente jamás habrían accedido si hubieran tenido que esperar los beneficios del mercado¹⁸. Agotado el modelo de acumulación que instalaba al Estado en una posición rectora y sobre el cual se asentaba además el dinamismo del proceso de crecimiento los defectos e insuficiencias del viejo orden estatal adquirieron un carácter grotesco. En el enrarecido clima producido por la embriaguez neoliberal, las razonables iniciativas tendientes a reformar el Estado se transformaron como en la Argentina menemista- en una irracional cruzada purificadora. Ofuscados por su afán de ser “más papistas que el papa” y deseosos de probar en los hechos su intensa adhesión a los dogmas del Consenso de Washington, en lugar de erradicar al “estatismo” como deformación viciosa de una institución como el Estado que, en la etapa actual, es irremplazable varios gobiernos de la región se dieron a la tarea de destruirlo. En la Argentina se privatizaron las empresas públicas, pero transfiriendo escandalosamente, a precios irrisorios y sin los más elementales recaudos que en el Reino Unido, por ejemplo, tomara la Sra. Margaret Thatcher- el patrimonio acumulado por varias generaciones a la antigua “patria contratista”, a multinacionales privadas o a monopolios estatales extranjeros. También se desregularon muchas actividades económicas (pero preservando ciertos “cotos de caza” para oligopolios regentados por “influyentes” allegados a los círculos gobernantes) y en detrimento de la colectividad se amputaron innecesariamente funciones legítimas de fiscalización y contralor (por ejemplo, en la industria farmacéutica, bebidas o la alimentación) que el Estado desempeñaba con razonable eficacia desde hacía medio siglo. Por último, se redujo el déficit fiscal, pero privando al Estado de los recursos más elementales para proveer bienes públicos e intervenir con eficacia en la vida económica y social, a la vez que con sus misérrimos sueldos se ahuyentaba a sus más honestos y leales servidores¹⁹.

Toda esta insensatez fue justificada por una ideología crudamente “privatista” que, incentivada por los tecnócratas ligados a las instituciones financieras internacionales, sostiene que todo lo que hace el Estado es malo, ineficiente y corrupto; y que todo lo que hace el sector privado es bueno, eficiente y virtuoso. Cegados por su dogmatismo, o por sus intereses materiales, los “fundamentalistas” de la economía neoclásica parecen no ser capaces de percibir que el record de empresas privadas de aviación como USAir (a quien se le cayeron cinco aviones en cinco años), o las difuntas Pan American o Eastern, empalidecen ante el que exhiben empresas estatales o con amplia mayoría accionaria estatal como Swissair, Lufthansa o Air France. O que los ferrocarriles estatales de Francia, Suiza y Alemania son infinitamente superiores en calidad, eficiencia y precio a la firma privada norteamericana Amtrak; o que la empresa estatal telefónica de Francia es incomparablemente superior a cualquiera de las privadas de los Estados Unidos y que, a pesar de su crisis, el Royal Mail británico es muchísimo mejor que los “correos privados” que pululan por toda América Latina gracias a las políticas de destrucción del Estado patrocinadas por los gobiernos neoliberales de la región. Ante esta evidencia, ¿cómo puede aducirse la “superioridad” en términos de eficiencia/racionalidad/precio/calidad/servicio de la empresa privada, en todo tiempo, lugar y circunstancia?

b) Las políticas sociales y las “fallas del mercado”

Ahora bien: es evidente que, ante la magnitud del desafío que plantea la rápida propagación de la pobreza en todo el continente, el Estado deberá diseñar un conjunto de políticas sociales que neutralicen y corrijan los desquiciantes efectos de las “fallas” del mercado, que en América Latina han demostrado una colosal ineptitud para resolver los problemas de la educación, la vivienda, la salud, la seguridad social, el medio ambiente y el crecimiento económico, para no citar sino los ejemplos más corrientes. El costo de no hacer nada pagando tributo al dogma neoliberal será inmenso, no sólo en términos de sufrimiento humano sino también de desempeño económico a mediano y largo plazo y de estabilidad democrática. Según diversos trabajos elaborados por la CEPAL, en 1960 un 51% de personas vivía por debajo de la línea de pobreza en América Latina, lo que equivalía a unos 110 millones de personas. En 1970 esta proporción descendió sensiblemente, a un 40%. En la década de los setenta la tendencia

positiva se estanca, registrando un ligero aumento hasta llegar a un 41% en 1980. Luego del estallido de la crisis de la deuda y la puesta en marcha de las políticas de ajuste y estabilización la regresión social cobra más fuerza: la proporción de pobres salta al 43% en 1986 y un 46% en 1990, esto es, 196 millones de latinoamericanos²⁰. Las estimaciones alternativas sobre lo que nos aguarda para el resto de la década de los noventa están lejos de ser tranquilizadoras. Adoptando una metodología que permite la “medición integrada de la pobreza” y, en ese sentido, diferente a la de la CEPAL, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo llega a las siguientes conclusiones. En un escenario “optimista”, es decir, suponiendo que el PBI per cápita crece a un ritmo promedio anual del 1,3%, se llegará al año 2000 con 296 millones de pobres, o sea, un 56,3% del total de la población de América Latina y el Caribe. Sin embargo hay otra posibilidad, esta vez “pesimista” que implica que el PBI per cápita permanece estancado y en cuyo caso la región contaría hacia finales de siglo con 312 millones de pobres, un 59,3% del total de la población²¹.

La gravedad de la situación retratada por el trabajo del PNUD salta a la vista, sobre todo si se recuerda que en la América Latina y el Caribe de los ochenta el PBI per cápita sólo una vez, en 1986, creció por encima del 1,3% estipulado bajo la hipótesis “optimista”, y que en los tres últimos años de la década el crecimiento fue negativo, de 1,2, 0,6 y 2,6% respectivamente. Si bien es cierto que a comienzos de los noventa se produjo una cierta recuperación en algunos países, también es cierto que ésta sigue siendo “parsimoniosa” y que los pronósticos distan de dar por terminada la recesión instalada desde los ochenta. En todo caso, hacia 1993 las economías latinoamericanas no habían dado señales muy convincentes como para abrigar mejores esperanzas y esperar con confianza el cumplimiento de las previsiones optimistas. La crisis del peso en México, en diciembre de 1994, vino a ensombrecer aún más este panorama. Bajo estas condiciones, ¿es posible construir democracias estables y legítimas?

En todo caso, si se persiste en la orientación de la política económica adoptada durante la década de los ochenta, los países de la región corren serios riesgos de que las modificaciones regresivas que tuvieron lugar en el pasado inmediato se profundicen y consoliden definitivamente, coagulando un nuevo tipo de estructura social caracterizada por su polarización, heterogeneidad y desequilibrios, con extremos de pobreza e indigencia que conviven con niveles crecientes de violencia, criminalidad, anomia y desorganización social con otros de riqueza y opulencia. Aquí surgen dos tipos de consideraciones. Por una parte no es con una mano de obra pauperizada, hambrienta, cada vez menos educada, carente de una adecuada atención sanitaria, mal vestida y peor alojada, como nuestros países podrán insertarse en la economía internacional. Las naciones que han sobresalido en este empeño han hecho exactamente lo contrario: invertir consistentemente en el capital humano, lo que ha llevado a reducir la pobreza y a construir sociedades más justas²².

Por la otra, a nadie se le escapa que una situación social de ese tipo -lo que ciertos economistas brasileños han dado en llamar el modelo de Belindia: una mezcla tenebrosa de la pobreza de la India con la opulencia belga ofrece un terreno escasamente propicio para la estabilización y funcionamiento de un orden democrático. Para que éste sobreviva se requiere que en la sociedad prevalezca un grado mínimo de justicia distributiva: nuestros países no sólo se encuentran por debajo de ese umbral sino que embelesados por el mito neoliberal marchan resuelta y despreocupadamente en sentido contrario. No hace falta insistir demasiado en la significación que este negativo desempeño de la economía tiene sobre la estabilidad democrática y la solidez de sus principios de legitimidad. Baste con recordar que semejante performance se encuentra en las antípodas de lo que fuera el rasgo distintivo de la reconstrucción democrática y económica de la Europa de posguerra. Los recientes acontecimientos de Perú y Venezuela; la ininterrumpida supremacía militar en Chile, apenas disimulada por la existencia de un gobierno civil; las dificultades con que tropiezan los avances democráticos en México; los avatares de la democracia en Haití; los alarmantes síntomas de la descomposición de un precario orden estatal en Colombia, y el “vaciamiento” que han sufrido las demás experiencias democratizadoras en el continente, son ominosos recordatorios de su fragilidad, aún cuando sea bueno recordar que éstas no son tan débiles como se temía y que han resistido hasta ahora el peso de una tremenda crisis económica. Sin embargo, sería conveniente no caer en un imprudente optimismo, fruto de la subestimación de los factores que tienden a erosionar la estabilidad del orden político. Un régimen democrático que merced a las políticas de “ajuste salvaje” empobrece año a año a un número cada vez mayor de ciudadanos,

o que transforma en letra muerta la separación de poderes, o que neutraliza por completo los débiles impulsos participativos desde la base, puede terminar cavando su propia fosa. Un régimen, en definitiva, que cancela la “ciudadanía política” lograda por la reinstauración de la democracia con la “desciudadanización económica y social” provocada por el apogeo del neoliberalismo, puede proyectar una superficial impresión de estabilidad, hasta que de súbito se produce el derrumbe. La progresiva deslegitimación de las nuevas democracias, producto de su incapacidad para mejorar la suerte de las grandes mayorías, difícilmente pueda ser considerada como un elemento positivo en su estabilización²³.

Pero retomamos el hilo principal de nuestro argumento: ante la reiterada comprobación de que el mercado no hará sino agravar los problemas de la pobreza y la inequidad social, se aduce que el Estado se encuentra en bancarrota y que carece de los recursos necesarios para financiar una agresiva política social que al menos neutralice la masa de pauperizados que año a año genera la aplicación de las políticas neoliberales. Es evidente que el Estado en la mayoría de los países de la región se encuentra en bancarrota, “de rodillas” ante sus acreedores, para utilizar la gráfica imagen de uno de los ministros del presidente Menem ante una comisión parlamentaria. Sin embargo, lo que se oculta cuidadosamente es que tan deplorable situación de las cuentas fiscales no se origina en la desmesura del gasto sino en la crónica incapacidad de nuestros gobiernos para expandir sus ingresos por la vía tributaria. Contrariamente a lo que predicen algunos de los más fervorosos exégetas del neoliberalismo, el “tamaño” del Estado en América Latina, medido por la proporción del gasto público sobre el PBI, es sustancialmente menor que el de los países industrializados. Decir, por lo tanto, que estamos en crisis porque gastamos más de lo que debiéramos ocultando el hecho de que, en relación al PBI, países como Argentina, Brasil, Chile y México gastan mucho menos que Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos y muchos otros gigantes de la economía mundial equivale a faltar gravemente a la verdad. Más de la mitad de las economías industriales más importantes del mundo destinaron en 1985 más del 50% de su producto bruto al gasto público y, además, pese a la vocinglería de los economistas neoliberales, éste no ha cesado de crecer²⁴. La prédica de sus funcionarios, ministros y banqueros es incongruente con sus prácticas políticas y está principalmente dirigida a los endeudados gobiernos de la periferia. Por el contrario, en América Latina el ajuste fiscal redujo el gasto público a los efectos de canalizar recursos para el pago de la deuda y controlar la inflación. A fines de los años ochenta el gasto público como porcentaje del PBI era de 32,8% en Argentina, 31,2% en Brasil, 36,4% en Chile, 31,1% en México, y 27,0% en Venezuela, es decir, cifras equivalentes a las de hace unos veinte años, siendo los recortes en los “gastos sociales” los más significativos²⁵. Estos guarismos, por otro lado, se colocan escasamente por encima de la mitad de los valores propios de los capitalismos desarrollados, por lo cual difícilmente podría hablarse, con seriedad, de que nuestros estados han registrado un crecimiento aberrante en términos internacionales. Un reciente estudio del Banco Mundial revela que los países de “bajos ingresos” tienen una proporción de gasto público sobre el PBI del 23%, mientras que las así llamadas “economías industriales de mercado” se sitúan en el 40,0%²⁶. En América Latina el gasto público de Guatemala, Perú y Paraguay es del 11,8%, 13,6% y 14,6% de sus respectivos productos brutos. Las cosas son bien distintas a como las pintan los tecnócratas del Consenso de Washington.

c) La inequidad en el sistema tributario

Lo anterior no implica desconocer el hecho de que el gasto público en los países de la región generalmente se administra de manera sumamente ineficiente. Tampoco significa ignorar el alto grado de corrupción que evidencian nuestros aparatos estatales, pero es preciso también recordar que este fenómeno no es menos grave y difundido en los capitalismos desarrollados, como lo prueban hasta la saciedad las experiencias de Italia y España y, en menor medida, el propio Japón. Tampoco es cierto que una política arrolladoramente “ultramercadista” como aconsejan los teóricos del Banco Mundial nos vaya a librar de la plaga de la corrupción. Las fuerzas del mercado no se caracterizan precisamente por un mayor apego a la justicia y la legalidad que el de los políticos y funcionarios públicos.

En todo caso, y más allá de estas salvedades, lo cierto es que el gasto público de nuestros países es sensiblemente inferior que el de los países industrializados. Pretender por lo tanto

“ajustar” las cuentas fiscales reduciendo aún más el gasto fiscal es una política profundamente equivocada, irrealista y condenada inexorablemente al fracaso. En la Argentina, por ejemplo, ya no queda por dónde ajustar gastos, con salarios en el sector público del orden de los 150 o 200 dólares mensuales; con sueldos docentes que fluctúan en torno a los 300 dólares y con jubilaciones que oscilan alrededor de los 150 dólares ya no quedan mucho margen para recortar los “excesos”, sobre todo cuando se tiene en cuenta que una canasta de bienes y servicios para una “familia tipo” oscila en torno a los mil dólares mensuales. Un gobierno que paga esos sueldos de hambre y que condena a los asalariados y pensionados a la indigencia; que ha renunciado casi por completo a hacer cualquier tipo de obra pública; que “deserta” de sus responsabilidades fundamentales en materia de salud y educación, que cierra ramales ferroviarios, que prácticamente ha privatizado todo lo privatizable y que ni siquiera invierte para sustituir los bienes amortizados: ¿cuál es el gasto que aún le queda por “ajustar”?²⁷

Nadie duda que es necesario equilibrar las cuentas fiscales y producir una reforma integral del Estado. Esta habrá de ser, sin duda alguna, una de las grandes tareas con que habrá de enfrentarse la izquierda en América Latina. Pero el talón de Aquiles de la crisis fiscal no radica en la desmesura del gasto sino en la incapacidad extractiva de nuestros gobiernos, y en su desinterés (más que en su debilidad política) para doblegar el “veto contributivo” que las clases dominantes han acordado (o en su defecto, impuesto) a las fuerzas políticas democráticas o autoritarias que gobernaron en los diversos países de la región. Esta fragilidad, o la complicidad estatal con los ricos, queda en evidencia cuando se compara la supuesta “alta presión tributaria” del Estado en América Latina con las cifras reales de lo que se paga en impuestos. Aquí nos encontramos con el hecho de que, contrariamente a la ideología dominante, nuestra presión impositiva es aproximadamente la mitad de la que existe en los países de la OECD y mucho más cercana a la que hay como promedio en África o Asia. Mientras que, en 1989, la presión tributaria medida como porcentaje del PBI de los países más desarrollados de América Latina oscilaba en torno al 17% (y la de Perú, Paraguay y Guatemala giraba alrededor del 8%) en África llegaba a 15,4% y en Asia al 14,6%. Por contraposición, en el conjunto de los países industrializados era como promedio el 37,5%, excluyendo en todos los casos las contribuciones por conceptos de seguridad social²⁸. Pero el ejemplo más elocuente lo provee el análisis de las cifras del impuesto directo en relación al PBI: mientras que el nivel promedio para los países de la OECD gira en torno al 14% del PBI, apenas si llegaba al 5% en México; 4% en Brasil y Colombia; 3% en Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay, y Ecuador; 2% en Paraguay, Perú y Guatemala, y 1% en Bolivia. Estos estados capitalistas, que fueron lo suficientemente “fuertes” como para dismantelar sus empresas públicas, amputar sus agencias administrativas, privatizar toda clase de servicios, destruir sindicatos y recortar salvajemente presupuestos fiscales y gastos sociales, aparecen como sorprendentemente débiles a la hora de organizar un régimen tributario mínimamente equitativo que obligue a los capitalistas a pagar impuestos en una proporción aproximada a la que prevalece en los países avanzados y, hasta cierto punto, en los del Sudeste Asiático²⁹.

Por otra parte, nuestra estructura impositiva es altamente regresiva e injusta: mientras que en los países industrializados los impuestos directos que gravan al capital, las ganancias y las manifestaciones de riqueza representan las dos terceras partes de los ingresos tributarios, en América Latina constituyen algo así como la tercera parte. Por consiguiente, el grueso de los ingresos fiscales proviene de impuestos al consumo, el trabajo y el comercio. Es decir, de gravámenes aplicados a los sectores no-propietarios de capital. Si las autoridades estuvieran dispuestas a producir una reforma fundamental de la legislación tributaria, estas graves distorsiones podrían ser suprimidas en un plazo relativamente breve. Mientras tanto, la incapacidad del Estado para doblegar el “veto contributivo” de los grandes capitalistas, y para controlar la fenomenal tasa de evasión y elusión impositiva, despoja a los distintos órganos del Estado de toda posibilidad de intervenir eficazmente en la coyuntura. En la Argentina los recursos genuinos captados por la vía impositiva parecen incapaces de perforar el bajo techo en que se encuentran actualmente, y la inequidad de la estructura tributaria llega a tales niveles de perversión que la relación entre el total de impuestos pagados (directos e indirectos) y el ingreso personal del veinte por ciento de menores ingresos de la población económicamente activa ¡es más elevada que la media nacional, y superior inclusive en relación al 10 por ciento más rico del país! Mientras en 1986 el déficit inferior destinaba el 29,30% del ingreso familiar al pago de impuestos y el siguiente déficit destinaba el 27,30%, la media nacional dedicaba a tales fines el 26,10% y el déficit superior, el de los más ricos, canalizaba en esa dirección el

27% de sus ingresos. Desafortunadamente, una situación como la descrita está lejos de ser una anomalía, sino que se reproduce en casi todos los países de la región³⁰.

Es evidente que una estructura de este tipo es insostenible, a la luz de las exigencias de la ética política y su preocupación por la justicia; también lo es desde el punto de vista de los imperativos de racionalidad macro económica que demanda el proceso de ajuste capitalista actualmente en curso. Es por eso que el complemento necesario del proceso de reconstrucción del Estado de Bienestar es la concreción de un nuevo “pacto fiscal” que ponga fin a las aberrantes inequidades contenidas en el régimen tributario. En ese sentido será preciso tener en cuenta que, al menos en el caso argentino, no sólo se trata de un nuevo acuerdo entre clases y sectores sociales sino entre las diversas instancias del Estado: el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y, finalmente, los municipios. Si esta tarea no es encarada urgentemente, cualquier tentativa de introducir un cierto orden racional en la vida económica está condenada al fracaso³¹.

La crisis del Estado benefactor, inclusive en las formas incompletas que asumió en la periferia, es un asunto que está fuera de discusión. Pero la incapacidad del neoliberalismo para ofrecer una respuesta satisfactoria, en términos económicos, sociales y políticos, es asimismo igualmente evidente. Lo que por ahora resulta mucho menos claro, y nos parece que éste es uno de los grandes desafíos con que tropieza la izquierda en América Latina, es cómo y con qué reemplazarlo³². La ilusión de que los recursos que malamente (según sus críticos neoliberales) asignaba el Estado keynesiano serían distribuidos mejor y a menor costo por el mercado se ha disipado por completo luego del fracaso del experimento neoliberal en los Estados Unidos y el Reino Unido. La fenomenal crisis del sistema de salud en los Estados Unidos revela, en un escenario privilegiado como muy pocos, las insuperables dificultades que tiene el mercado para garantizar una cobertura adecuada, eficiente y barata de un bien público tan prioritario como la salud. No en vano los países que salieron mejor posicionados de la crisis de los ochenta fueron aquellos que se abstuvieron de aplicar las recomendaciones de los fundamentalistas del Consenso de Washington.

El neoliberalismo y la organización internacional del capitalismo

En esta sección discutiremos los instrumentos y mecanismos mediante los cuales el neoliberalismo afianzó su hegemonía en el plano internacional y la validez empírica y la consistencia lógica de algunas de sus propuestas centrales. Es evidente que los triunfos electorales de Margaret Thatcher y Ronald Reagan marcaron el apogeo de esta ideología a comienzos de la década del ochenta. Al convertirse en el “dogma” dominante de los Estados Unidos y el Reino Unido, el neoliberalismo adquirió una gravitación en el sistema internacional pocas veces vista en la historia. De la mano de esta “derechización” del clima ideológico y político de Occidente vino el ascendiente de las teorías económicas neoclásicas, con sus hechiceros y aprendices de brujo dispuestos a aplicar, en todas partes y bajo cualquier circunstancia, la misma receta codificada en el Consenso de Washington. Pero este retorno de la ortodoxia, para usar la expresión de un asombrado Raúl Prebisch, se produjo en un terreno que ya había sido convenientemente abonado por el agotamiento del boom de la posguerra y por el desprestigio en que habían caído las fórmulas keynesianas. América Latina no pudo resistir al “contagio” ideológico, y uno tras otro los sucesivos gobiernos y fuerzas políticas capitularon ante la nueva ortodoxia que predicaban con inusitado fervor los voceros de la metrópolis.

Hay, sin embargo, otros antecedentes más lejanos que también favorecieron la vigorosa resurrección de las ideas liberales abandonadas en el fragor de la Gran Depresión. Se trata del “régimen económico” internacional establecido a finales de la Segunda Guerra Mundial, un régimen que establecía unas reglas del juego inspiradas en la doctrina del liberalismo económico para un mundo que, pese a estas exhortaciones, las violaba impunemente con el proteccionismo y el neoproteccionismo, con los fabulosos déficits fiscales y con las políticas migratorias restrictivas³³.

Difícilmente podría exagerarse la importancia del papel jugado en la historia económica del último medio siglo por los acuerdos de Bretton Woods. En el verano boreal de 1944 y ante la

inminencia de una segura victoria militar, los aliados convocaron (en realidad, obedeciendo a una fuerte presión norteamericana) a una conferencia monetaria y financiera para acordar los lineamientos del “liberalismo global” que habría de prevalecer al emergente orden mundial de posguerra. La reunión tuvo lugar en Bretton Woods, New Hampshire, cuando las noticias triunfales del desembarco de Normandía renovaban las esperanzas de un pronto desenlace en los frentes de batalla. Temas fundamentales de la conferencia a la que asistieron cuarenta y cuatro países, incluyendo la Unión Soviética fueron la elaboración de las nuevas reglas del juego que debían regir el funcionamiento de la reconstruida economía mundial y la creación de las instituciones encargadas de asegurar su vigencia. La premisa subyacente era que el proteccionismo comercial había sido el gran culpable de las tragedias ocurridas en los convulsionados treinta años que siguieron al estallido de la Primera Guerra Mundial. En consecuencia, buena parte de las deliberaciones estuvo dedicada a identificar mecanismos que asegurasen (a) el predominio del libre comercio y la eliminación de todo vestigio de proteccionismo; (b) el financiamiento externo de países agobiados por problemas de corto plazo (caída en los volúmenes y/o precios de sus exportaciones, déficit presupuestarios, inestabilidad monetaria, etc.), y (c) la aprobación de un conjunto de políticas dirigidas a hacer posible la reconstrucción y el desarrollo de las economías devastadas por la guerra. Esta división de tareas entre la promoción del libre comercio, la estabilización macroeconómica y las reformas estructurales habría de originar en 1947 el General Agreement on Trade and Tariffs (GATT) y las instituciones gemelas que nacerían de las deliberaciones de Bretton Woods: el Banco Mundial en 1945, y el Fondo Monetario Internacional un año después.

Lo que estos acuerdos hicieron fue consolidar, en el terreno de la economía mundial, la victoria militar de los aliados y muy especialmente de los Estados Unidos, la potencia cuyo irresistible ascenso a la hegemonía internacional era ya un dato inocultable. Quienes participaron en la conferencia de Bretton Woods eran en realidad un abigarrado mosaico en donde junto a los anfitriones convivían dificultosamente sus antagonismos estructurales eclipsados por el esfuerzo supremo de la lucha antifascista viejas potencias colonialistas en decadencia, naciones secularmente sometidas a la rapiña de Occidente y, solitaria, la joven república soviética.

Las divergencias entre los gobiernos capitalistas de los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido eran tan profundas como irritantes. Washington nunca ocultó su desdén por la Francia ocupada por los nazis. Tampoco su benigna condescendencia hacia los británicos. En dicha conferencia los Estados Unidos (y los aliados en su conjunto) tampoco perdieron de vista el carácter efímero de su amistad con Moscú, como lo confirmaría la Guerra Fría pocos años después. En verdad, en Bretton Woods norteamericanos e ingleses discutieron acerca de las condiciones bajo las cuales se resolvería la vacancia hegemónica surgida a causa de la declinación de los segundos, y que había ocasionado dos guerras mundiales y precipitado la Gran Depresión de los años treinta.

Los norteamericanos, por su parte, estaban empeñados en asegurar las condiciones más propicias para consolidar la hegemonía resultante de su decisiva participación en la Segunda Guerra Mundial, y del hecho excepcional de que dicha conflagración se hubiera producido sin que se disparase un solo tiro en su territorio, sumiendo en cambio tanto a aliados como a adversarios en la ruina y la destrucción. Los británicos, por su parte, trataban comprensiblemente de evitar que el derrumbe del Imperio los dejara demasiado desairados y en posiciones sumamente desventajosas. La derrota de los sensatos argumentos de John M. Keynes sin duda uno de los más grandes economistas de nuestro siglo y delegado de Londres a la conferencia no se debió a la superioridad discursiva del ignoto representante norteamericano sino a la desfavorable correlación de fuerzas con que el Reino Unido enfrentaba el incontenible ascenso de la pax americana.

Poco tiempo después, una vez concluida la guerra, el verdadero papel que estaban llamados a desempeñar estos acuerdos de Bretton Woods sus beneficiarios principales y las víctimas de los mismos aparecería con meridiana claridad. La crisis de la deuda y la interminable sucesión de ajustes que han padecido las economías latinoamericanas desde ese entonces constituyen tan sólo el último capítulo de esta historia.

A medio siglo de distancia parece oportuno evaluar el papel que el Banco Mundial y el Fondo

Monetario Internacional han efectivamente jugado en la economía mundial y, muy especialmente, en los capitalismos periféricos. Estas instituciones han cumplido, y siguen haciéndolo en nuestros días, una función eminentemente “disciplinadora” dentro de la economía capitalista internacional. Su poder de hecho se ha acrecentado considerablemente a partir de la década de los ochenta, cuando las naciones de la periferia o los eslabones más débiles del mercado mundial sucumbieron ante el peso combinado de la recesión y la crisis de la deuda. Es por esto que la “capacidad disciplinadora” del BM y el FMI ha sido eficaz sobre todo en la periferia: en América Latina y en África, muchísimo menor en Asia y nula por completo en las economías desarrolladas. El BM y el FMI son muy efectivos en presionar para imponer una rígida disciplina fiscal en América Latina, pero sus recomendaciones son olímpicamente desoídas por los gobiernos de los países desarrollados. El déficit fiscal de los EE.UU. al culminar la era republicana fue del 4,9 por ciento del PBI, y el de Italia a comienzos de los noventa era cercano al 10 por ciento, lo cual no impedía a los gobiernos de Reagan y Craxi predicar con entusiasmo las virtudes del equilibrio fiscal y las bondades de un Estado pequeño. Pero por un déficit mucho menor que éstos digamos un 1 o 1,5 por ciento el BM o el FMI se sienten en la obligación de enviar una misión a América Latina para exigir que nuestros gobiernos “pongan su casa en orden”, lo que invariablemente se traduce en recortes presupuestarios y congelamientos salariales. Es interesante constatar cómo la creciente inadecuación de las instituciones de Bretton Woods para regular el funcionamiento del capitalismo contemporáneo las llevó a aplicar una política “foucaultiana” de “vigilancia y castigo” sobre las economías más débiles, mientras desnudan su deplorable impotencia para hacer frente a los grandes problemas de la economía mundial y en particular a los efectos desquiciantes de las incontroladas transacciones financieras internacionales. La pregunta, por lo tanto, no es ociosa: el BM y el FMI, así como están, ¿para qué sirven?

Sin embargo, su comprobada inutilidad para regular la creciente inestabilidad de los mercados internacionales no fue óbice para que tanto el BM como el FMI pasaran a desempeñar un papel protagónico en la orientación de las políticas económicas adoptadas por estados supuestamente soberanos; en la supervisión de la implementación de dichas políticas siempre previamente “acordadas” con sus expertos; en la certificación de la “buena conducta” de los distintos gobiernos, cada vez más necesaria a medida que la bomba de tiempo del Plan Brady exige más y más desembolsos que estos países no están en condiciones de afrontar con fondos genuinos; y, por último, en la concesión de préstamos y financiamientos especiales a los diversos gobiernos que necesitan hacer frente a una coyuntura difícil.

Pero más allá de desempeñar todas estas funciones que con cierta benevolencia podríamos considerar como exclusivamente “técnicas” y financieras el BM y el FMI se convirtieron en un gigantesco think-tank del neoliberalismo. Más de diez mil economistas y unos pocos centenares de científicos sociales trabajan bajo su manto, acopiando datos y realizando estudios de todo tipo que luego sirven de base para las recomendaciones y los policy papers de ambas instituciones y, fundamentalmente, para apoyar la prédica neoliberal de sus voceros y para rodear con un halo de cientificidad tecnocrática las presiones que sus máximas autoridades ejercen sobre los gobiernos. Esta sería pues la función ideológica que cumplen las instituciones surgidas de Bretton Woods, destinadas a: (a) convertir al neoliberalismo en el sentido común no ya de una época sino de toda la humanidad, fuera de lo cual sólo existe la locura, el error o el más obcecado dogmatismo, con lo cual se coloca en manos de las clases dominantes una poderosísima herramienta de control político y social; (b) convertir al capitalismo en la culminación de la historia humana, la “última” y más elevada forma de organización económica y social jamás conocida en la historia.

Sin embargo, el “catecismo” neoliberal tropieza con algunos serios escollos: en primer lugar, la historia económica de los últimos doscientos años no ofrece un solo ejemplo de un país que hubiera salido del atraso o el subdesarrollo siguiendo el modelo de reformas neoliberales que hoy con tanta enjundia recomiendan el BM o el FMI. Sus más caracterizados representantes no pueden mencionar ni un solo caso que respalde con la experiencia histórica la supuesta verdad contenida en las recetas económicas del Washington Consensus. Ninguno de los ejemplos más exitosos del período de posguerra -Alemania, Italia, Francia, Japón, más tarde España, Corea y los Nics asiáticos, para no hablar de la China adhirió a los preceptos libremercadistas que con tanto celo el BM y el FMI propagandizan por todo el mundo y que tanta influencia ejercen sobre los gobiernos de América Latina.

Por otro lado, tampoco pueden sus “expertos” demostrar, más allá de toda duda razonable, que los países que llevan a cabo los programas de estabilización y ajuste estructural recomendados por el BM y el FMI tienen abierta la vía al crecimiento y desarrollo económicos, aunque sea en el corto plazo. En algunos casos y por un cierto tiempo- parecería que sí, pero hay una evidencia estadística no menos persuasiva que sostiene lo contrario. Chile y México adoptaron con entusiasmo las “reformas orientadas al mercado”, pero mientras Chile creció (modestamente, como ya veremos) México decreció.

Conviene detenernos en este punto. A los efectos comparativos, y para atenuar la propaganda montada desde el BM y el FMI en torno de lo que se ha dado en llamar “el milagro chileno”, convendría recordar que el crecimiento del ingreso bruto nacional real per cápita de Chile entre 1980 y 1990 fue del 2,9 por ciento, es decir una tercera parte de la tasa de crecimiento que China registrara anualmente a lo largo de esa década y cerca de la mitad de la que tuvieron Corea del Sur, Taiwan, Tailandia, Hong Kong y Singapur³⁴. Y ninguno de estos países, cuya performance económica ha sido incomparablemente superior a la de cualquier otro de América Latina incluyendo naturalmente a Chile, México antes del colapso de diciembre de 1994 y la propia Argentina aplicó en lo más mínimo las recomendaciones del modelo neoliberal. Todo lo contrario. Esto se observa con meridiana claridad en lo que hace al papel del Estado (que como es bien sabido, se acentuó en aquellas latitudes) y a la distribución del ingreso, un aspecto menos conocido entre nosotros. Mientras en los países del Sudeste Asiático la desigualdad social comenzó a achicarse desde las primeras etapas del desarrollo al paso que los ingresos se redistribuían progresivamente en la experiencia latinoamericana- las desigualdades se profundizaron y los salarios reales experimentaron una notable caída. Si la teoría neoliberal hubiese sido correcta, las crecientes desigualdades sociales y el desplome de las remuneraciones a los asalariados habrían sido poderosos resortes para atraer las inversiones de los capitalistas y estimular el crecimiento económico. Nada de eso ocurrió por estas latitudes, y lo mismo aconteció en el Reino Unido bajo el gobierno conservador de Margaret Thatcher.

Fueron, por el contrario, los países del sudeste asiático quienes crecieron mucho más que los de América Latina y Europa. En 1952 el ingreso del 20% superior de la pirámide de ingresos de Taiwan era 15 veces mayor que los correspondientes al quintil inferior; hacia 1980 esta desproporción se había reducido a 4,2 veces.

En Chile, en 1970 el quintil superior de la distribución de ingresos se apropiaba del 55,8% del ingreso nacional, mientras que los dos quintiles inferiores que comprendían al 40% de la población económicamente activa apenas disponían del 11,5%, lo que arroja una razón de 4,9 (pero contra dos quintiles, y no uno como en el caso taiwanés). En 1982-83 el quintil superior acrecentó sus ingresos y ascendió a un 59,5%, mientras los dos quintiles de la base descendían al 10%, elevando la razón de la desigualdad a 5,9. Es razonable suponer que si esta comparación se efectuara contrastando solamente quintil superior versus quintil inferior tal como se hizo en el caso taiwanés el perfil de la distribución de ingresos de Chile se acercaría bastante al que imperaba en Taiwán antes de que este país se transformara en una de las más exitosas economías del mundo. Una historia similar, a veces más patética todavía, puede contarse si se observan otros países de nuestra región³⁵.

En otras palabras, el caso del exitoso modelo de ajuste tan elogiado por el Banco Mundial y el FMI es suficientemente ilustrativo: en 1988 es decir, ¡quince años después de inaugurado el experimento neoliberal! el ingreso per cápita y los salarios reales todavía no eran muy superiores a los de 1973, a pesar de los inmensos sacrificios exigidos por la dictadura y entre los cuales habría que destacar el 15% de desempleo promedio registrado entre 1975 y 1985, con un pico de 30% en 1983. Entre 1970 y 1987 el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza aumentó del 17 al 38%, y en 1990 el consumo per cápita de los chilenos todavía era inferior al registrado diez años antes. Como bien concluye Luiz Carlos Bresser Pereira, “la sociedad chilena probablemente no hubiera tolerado estos costos transicionales si el régimen político hubiera sido democrático”³⁶. Pero esto no es todo: diecisiete años de políticas neoliberales no sólo fueron incapaces de disminuir los bolsones de pobreza sino que, por el contrario, acrecentaron considerablemente la distancia que separaba ricos de pobres. Jorge G. Castañeda observa con toda justeza que entre 1978 y 1988 el decil más adinerado de

la sociedad chilena aumentó su participación en el ingreso de 36,2% al 46,8%, ¡mientras que el cincuenta por ciento más pobre bajó la suya de 20,4 % a 16,8%!³⁷

En México, por su parte, la involución económica y social experimentada tras más de una década de ajustes ortodoxos es indiscutible. Los datos oficiales demuestran que el ingreso bruto nacional real per capita cayó en 12,4 por ciento entre 1980 y 1990, pese al celo “reformista” con que el gobierno del PBI impulsó las políticas neoliberales³⁸. Por otra parte, los datos indican que en esos años también aumentó significativamente la pobreza: entre 1982 y 1988 el salario real se redujo en un 40% y desde entonces apenas si ha mejorado; el tradicionalmente alto nivel de desempleo abierto y encubierto de México se ha elevado aún más al paso que el consumo per cápita del año 1990 fue en un 7% inferior al registrado en 1980³⁹. Según Jorge Castañeda, “cuando en 1992 el gobierno mexicano hizo públicas las primeras estadísticas de distribución del ingreso en quince años, resultaron aterradoras”. El optimismo oficial, imperturbable ante estas revelaciones, fue sin embargo violentamente sacudido por la insurrección en Chiapas, los dos magnicidios, el descomunal déficit de la balanza comercial, y finalmente el colapso económico y la devaluación del peso ocurridas a fines de 1994, verdadero annus terribilis para los ideólogos del neoliberalismo, que tenían en el caso mexicano uno de sus más brillantes ejemplos⁴⁰.

Brasil no se reformó y sin embargo en términos per cápita la caída de su producto fue inferior a la que experimentara México. Pese a ello el gigante sudamericano consolidó su posición en los mercados internacionales como una potencia industrial y, por su tamaño, como la octava o novena economía del mundo. Un dato sumamente interesante a tener en cuenta es que a pesar de su régimen de alta inflación y las turbulencias políticas y sociales de la segunda mitad de los ochenta, Brasil continuó siendo uno de los mercados más atractivos para la inversión extranjera, lo cual desmiente con la contundencia de los hechos la prédica de los profetas neoliberales. La Argentina de los ochenta, finalmente, ni se reformó ni creció, y la catastrófica caída de su ingreso, medida por los mismos criterios que los anteriores países, fue de 33,5 por ciento. Cuando en los noventa el gobierno de Menem abraza con ardor la ortodoxia neoliberal, la economía parece crecer con mucha fuerza. En realidad, se recupera del formidable bajón experimentado en esa década, sobre todo entre 1988 y 1990. La recuperación posterior en el período 1991-94 fue innegable, pero hay que colocarla contra el depresivo telón de fondo de los años ochenta.

En síntesis: la ecuación del desarrollo es mucho más compleja que la fórmula de Bretton Woods. No basta con la estabilización monetaria, la apertura comercial, la supresión del déficit fiscal, la desregulación y las privatizaciones. Como lo demuestra hasta la saciedad la experiencia europea de la segunda posguerra y, más recientemente, la del Japón y el Sudeste asiático, el desarrollo requiere una esclarecida política estatal y ésta, naturalmente, supone la existencia de un Estado dotado de capacidades efectivas de intervención. No es un azar que el desempeño de la economía chilena haya tenido como uno de sus puntales y también como uno de sus rasgos más “extravagantes” desde el punto de vista del catecismo neoliberal la preservación en manos del Estado de la estratégica industria del cobre, estatizada durante los gobiernos de Frei Montalva (1964-70) y Allende (1970-73) y que aporta alrededor de la mitad de los ingresos por concepto de exportaciones. Este dato es cuidadosamente omitido por los teóricos del Consenso de Washington, dado que el mismo es incongruente con los preceptos que aconsejan privatizar toda la propiedad pública por “ineficiente” e “inflacionaria”. Si se extrapolasen las lecciones del caso chileno a la Argentina o el Brasil los economistas del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional se verían en la incómoda posición de tener que recomendar a Buenos Aires la nacionalización de la pampa húmeda y parte del moderno sector industrial exportador, y a Brasilia hacer lo propio con la industria paulista... Es por eso que uno de los más encumbrados economistas del Banco Mundial, Sebastián Edwards, prefiere silenciar por completo esta anomalía aun a riesgo de lesionar muy gravemente los principios más elementales del método científico. En un reciente trabajo de divulgación doctrinaria en donde existe un acápite titulado “Chile como modelo” el autor oculta toda información sobre el papel desempeñado por la industria cuprífera del Estado, como si fuera un detalle insignificante que ni siquiera merece una nota al pie de página⁴¹.

Otra de las dificultades con que tropieza la propuesta neoliberal radica en el hecho de que aun en los casos “exitosos” de ajuste y estabilización de corto plazo, el crecimiento económico

resultante produce un sostenido aumento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Estos “costos sociales” del ajuste suscitan, en el seno mismo del BM y el FMI, dos grandes interrogantes que los más lúcidos expertos de ambas instituciones no dejan de plantearse: (a) en primer lugar, acerca de la sustentabilidad económica del ajuste estructural en el mediano plazo; (b) su viabilidad política en el marco de un Estado democrático.

En relación a lo primero, las tribulaciones comienzan ni bien se cae en la cuenta de que en las condiciones actuales del mercado internacional las economías caracterizadas por profundos clivajes y discontinuidades estructurales, marcadas desigualdades sociales, y bajos niveles de salud y educación de la fuerza de trabajo, están inexorablemente condenadas a ser las eternas perdedoras en un mercado mundial cada vez más ferozmente competitivo. La economía de finales del siglo XX es “conocimiento intensivo”. Es ésta la principal ventaja competitiva que tienen las naciones y es la que explica que un país desprovisto de recursos naturales, como el Japón, pueda ser una de las potencias industriales más importantes del planeta. Pero este país cuenta con una fuerza de trabajo altamente educada, que goza de una excelente atención médica, y posee una estructura social integrada en la cual las fenomenales disparidades de ingreso y riqueza que caracterizan a los países latinoamericanos son por completo desconocidas. El problema es que la aplicación de las recetas neoliberales de estabilización y ajuste estructural tiende precisamente a producir las condiciones sociales menos promisorias para que las economías en cuestión puedan sobrevivir exitosamente a los imperativos de la apertura comercial y la liberalización de los mercados. En otras palabras, con el catecismo del BM y el FMI en sus manos nuestros gobiernos están destruyendo la educación y la salud pública, acentuando las desigualdades sociales, acrecentando la proporción de pobres estructurales y marginales de todo tipo que no pueden ser “reconvertidos” e incorporados creativamente a la economía moderna. El problema se suscita cuando, siguiendo la lógica del export led growth propiciada por los neoliberales, esa misma fuerza de trabajo debe salir a competir en los mercados mundiales con la de países, como los del Sudeste Asiático, que por no adherir a las tesis del Consenso de Washington robustecieron sus estados nacionales, aumentaron el gasto público en salud y educación, invirtieron macizamente en investigación y desarrollo, lanzaron ambiciosos programas de reconversión de la población trabajadora y fomentan sus exportaciones con subsidios e incentivos de todo tipo.

Si lo anterior remite, de cierta forma, a uno de los “límites económicos” de la receta neoliberal, el tema del impacto de estas políticas sobre las perspectivas de la consolidación democrática no es menos preocupante que el anterior. No es necesario caer en un economicismo desenfrenado para reconocer que ciertos modelos de acumulación capitalista son más propensos que otros a facilitar el funcionamiento de un régimen autoritario. Si el “capitalismo keynesiano” con su énfasis en la demanda agregada, el combate al desempleo y la integración de la clase obrera creó condiciones favorables para el advenimiento e institucionalización de estados capitalistas democráticos en la Europa de posguerra, el “capitalismo salvaje” que surge de la receta neoliberal tiene, por el contrario, “afinidades electivas” con las formas más primitivas y despóticas del poder burgués. De ahí que haya quienes temen que el “éxito” de esta propuesta refundacional del capitalismo se convierta en una victoria pírrica en donde la democracia sea una de sus víctimas más destacadas. El problema es que la lealtad fundamental de la nueva ortodoxia económica y de la gran burguesía trasnacional que la enarbola como su bandera no está depositada en la democracia sino en el capitalismo. Tal como el propio Friedrich von Hayek lo declarara en la célebre entrevista concedida al matutino conservador El Mercurio, si hubiera que elegir entre una economía de libre mercado con un gobierno dictatorial o una economía con controles y regulaciones pero con un Estado democrático, elegiría sin dudas lo primero. La actitud de uno de los padres fundadores del neoliberalismo retrata a la perfección el dilema al que se enfrenta la burguesía y su opción preferencial. Tanto sus intereses como sus valores la llevan a sacrificar cualquier cosa con tal de reafirmar la vigencia del modo de producción que le es propio, disposición tanto más comprensible cuando se recuerda la tradicional desconfianza por no decir abierta hostilidad con que los ideólogos del capitalismo han tratado el tema de la democracia. En el caso de von Hayek, como en el de Milton Friedman, esta elección en favor de una dictadura que preserve la libertad mercantil trata de fundamentarse en una concepción que sostiene que la libertad económica es “la madre de todas las libertades”. Tesis profundamente equivocada, insostenible a la luz de la experiencia histórica, pese a lo cual se ha convertido en un verdadero artículo de

fe recitado a pie juntillas por los intelectuales, funcionarios y gobernantes integrados a la hegemonía ideológica del neoliberalismo⁴².

Una última consideración. No deja de ser una curiosa muestra de éxito el hecho de que las economías que se “sanean” con la medicina neoliberal tengan más pobres que nunca y la “deuda social” crezca inconteniblemente.

Las “instituciones financieras internacionales”, eufemismo para referirse al BM y el FMI, recomiendan calurosamente unas políticas que generan pobreza y exclusión social, y al mismo tiempo encomiendan numerosas investigaciones sobre el tema y manifiestan su consternación por el agravamiento del flagelo de la pobreza en América Latina. ¿Cómo se entiende esta contradicción, más allá de la indudable cuota de hipocresía que subyace a estas preocupaciones? En otro trabajo, referido al caso argentino, hemos intentado ofrecer una hipótesis para la interpretación de esta aparente paradoja⁴³. En su nocturnal retorno los autoproclamados discípulos de Adam Smith se convirtieron en los cultores y ejecutores de una política económica cuyo resultado más perdurable ha sido la generalización sin precedentes de la pobreza. Esta ha adquirido rasgos muy pronunciados en América Latina y formas un poco más atenuadas pero no por ello menos desquiciantes en el mundo desarrollado: una breve recorrida por el inner city de cualquiera de las grandes ciudades norteamericanas así lo demuestra. El tema ha originado una verdadera avalancha de estudios, artículos y libros dedicados al examen de la cuestión, especialmente en los países industrializados, y la bibliografía sobre la materia es inmensa y crece arrolladoramente día tras día. Ahora bien, si Adam Smith que primero fue profesor de filosofía moral y luego se dedicó a la economía, en una trayectoria semejante a la de Karl Marx preanunciaba un mundo de riquezas armoniosamente distribuidas gracias a la virtud que encerraba la “mano invisible” del mercado, sus sombríos descendientes de finales del siglo XX viven vergonzantemente obsesionados por la creación de la pobreza. Tal como lo demostró convincentemente Max Weber, la creencia que profesaban los burgueses calvinistas en la predestinación hizo que éstos buscaran en su enriquecimiento, en la posesión de los bienes materiales, los signos divinos confirmatorios de su propia salvación⁴⁴. Por el contrario, los neoliberales contemporáneos, no menos fundamentalistas y dogmáticos que aquellos calvinistas de antaño, encuentran en la pobreza el “mensaje sagrado” que ya no lo transmite la iglesia reformada sino el BM y el FMI que certifique que efectivamente se está transitando por el virtuoso sendero de las reformas económicas “orientadas hacia el mercado”.

En síntesis: para el dogma neoliberal la generación de pobreza es señal de que se está marchando por el rumbo correcto. La pobreza y los padecimientos de las masas tienen un significado promisorio: en realidad significa que “las fuerzas del mercado” están moviéndose sin interferencias, y la reestructuración económica procede tal cual se esperaba una vez que el Estado se hizo a un lado y el “instinto capitalista” se puso en marcha, libre de las “artificiales” regulaciones caprichosamente establecidas durante décadas por gobernantes hostiles. Esto puede parecer esquemático o, en el peor de los casos, una censurable tentativa de reductio ad absurdum de las posiciones ideológicas adversarias. Sin embargo, veamos lo que con singular franqueza y preocupación dijera un reciente converso al neoliberalismo, el ministro checo de Economía Vladimír Dlouhý:

... para los proponentes de las reformas, el desempleo y los cierres de firmas constituyen las pruebas de que aquellas alcanzan sus objetivos: si el bajo desempleo actual no se eleva al 8 o 10% este año... será una señal de que las reformas no lograron su propósito⁴⁵.

La generación del desempleo, en consecuencia, lejos de ser un indicio preocupante es una señal de que las cosas marchan bien, de que la economía se está “reestructurando”, modernizando, tomándose más competitiva. Son, en síntesis, nada más que los dolores del parto de la nueva sociedad que los hechiceros neoliberales están alumbrando, y no hay razones para preocuparse. ¡Vaya contraste! Max Weber observó con agudeza que el burgués calvinista buscaba en su acrecentada riqueza los signos de su salvación espiritual. De este modo las redenciones individual y colectiva aparecían ligadas por una “conexión de sentido” que, al menos en el capitalismo competitivo, asociaba fuertemente con la creación y (relativa) diseminación de la riqueza. El agotamiento y descomposición de aquella fase histórica del capitalismo admirablemente retratada en la obra de Daniel Bell, en donde el “espíritu

capitalista” articulaba valores tan distintos a los actuales, como el ascetismo, la frugalidad, el puritanismo, el ahorro, la ética del trabajo, etc., produjo un “desplazamiento” por el cual los signos confirmatorios de que hemos emprendido la ruta de la salvación son buscados en la pobreza y el desempleo⁴⁶. El neoliberalismo es pues una perversa involución del Calvinismo: la multiplicación de los pobres y el aumento del sufrimiento humano no son más que dolorosos mensajes situados al comienzo del camino, indicando que estamos sobre la buena senda. Pero no hay que desesperar: son anuncios transitorios. No tardarán en aparecer otros, como el pleno empleo, el bienestar popular y la felicidad individual, señalando que se ha arribado al paraíso neoliberal, donde se podrán recoger los frutos de tanto esfuerzo. El pródigo “derrame” de la riqueza es apenas una cuestión de tiempo.

Neoliberalismo y destrucción de la sociedad civil

¿Qué tipo de sociedad dejan como legado estos quince años de hegemonía ideológica del neoliberalismo? Una sociedad heterogénea y fragmentada, surcada por profundas desigualdades de todo tipo clase, etnia, género, región, etc. que fueron exacerbadas con la aplicación de las políticas neoliberales. Una sociedad de “los dos tercios”, o una sociedad “a dos velocidades”, como suele ser denominada en Europa, porque hay un amplio sector social, un tercio excluido y fatalmente condenado a la marginación y que no puede ser “reconvertido” laboralmente ni insertarse en los mercados de trabajo formales de los capitalismos desarrollados⁴⁷. Esta creciente fragmentación de lo social que potenciaron las políticas conservadoras fue a su vez reforzada por el formidable avance tecnológico y científico y su impacto sobre el paradigma productivo contemporáneo. Esto se ha manifestado en una fenomenal capacidad de reemplazar el trabajo vivo por “máquinas inteligentes”, informatizadas y computadorizadas, lo que plantea por primera vez la posibilidad de que el trabajo, que desde los albores de la humanidad requirió el concurso de todos cuantos tuvieran alguna capacidad física para ejercerlo, se convierta en una actividad que sólo requiera la participación estratégica de una fracción de la masa laboral: los “analistas simbólicos”. ¿Se habrá acabado la era del trabajo de masas?⁴⁸ Puede ser prematuro dar una respuesta, pero es indudable que el desarrollo de las fuerzas productivas apunta en esa dirección.

Claro está que “el fin del trabajo”, parafraseando, el título del libro de Rifkin, no tiene un significado unívoco. Este depende fuertemente de la naturaleza de las relaciones sociales existentes: en una sociedad socialista puede significar el comienzo de la “verdadera historia” de la humanidad, como decía Marx, en la cual hombres y mujeres se liberen definitivamente de la servidumbre del trabajo en cualquiera de sus formas. Pero bajo el predominio del neoliberalismo y su culto supersticioso al mercado el agotamiento del “trabajo de masas” se traduce en desempleo masivo, pobreza extrema, anomia y desintegración social, drogadicción, auge de la criminalidad, etc. Más allá de las muchas dudas que ha suscitado el colapso de los “socialismos realmente existentes”, parece razonable pensar que si el incontenible progreso técnico nos lleva a una radical redefinición del trabajo humano, el neoliberalismo está lejos de proveer el marco ideológico, social, económico y cultural más adecuado para adaptarse a las nuevas circunstancias. La combinación del “fin del trabajo” con el darwinismo social del mercado puede ser explosiva, y conducir a una hecatombe social de proporciones desconocidas.

La herencia del neoliberalismo es también una sociedad menos integrada, producto de las desigualdades y hendiduras que profundizó con su política económica. Contrariamente a lo que ocurre en Europa, es bien probable que en América Latina los “dos tercios” a los cuales aludíamos más arriba correspondan a los excluidos, mientras que sólo un tercio pueda disfrutar de los beneficios del progreso económico. Una sociedad que, en realidad, se ha convertido en una yuxtaposición de universos sociales que ya casi no guardan vínculos entre sí. Aunque parezca paradójico, el Brasil esclavista o el México colonial fueron sociedades mucho más integradas que las sociedades burguesas de finales del siglo XX: la explotación de las clases subalternas exigía entonces ciertas formas de sociabilidad por entero ausentes en el Brasil o el México capitalista de nuestros días.

El fazendeiro y el esclavo. el hacendado y el campesino indígena, eran polos antagónicos de una misma sociedad. En cambio, la gran burguesía de los países latinoamericanos (y las

clases y grupos sociales integrados a su dominio) y las masas marginales que viven por debajo de la línea de pobreza pertenecen a dos universos distintos: viven económica, social, cultural y ecológicamente segregados. Robert Reich, actual Secretario de Trabajo del presidente Clinton, refiriéndose al impacto del neoliberalismo en los Estados Unidos, dijo que en su país hay gente que vive en la misma sociedad pero en dos economías completamente distintas. Esto es tanto más cierto en América Latina. Nuestros burgueses viven en distritos residenciales exclusivos, protegidos por sofisticados sistemas de vigilancia y electrónico *surveillance*; sus niños asisten a escuelas y colegios donde sólo concurre gente de su misma condición, y luego los envían a estudiar en colleges y universidades norteamericanas. Se atienden en los hospitales de Houston y Miami, se divierten en Nueva York, Londres o París y acumulan capital en una vasta gama de emprendimientos altamente globalizados en donde el contacto físico con algún miembro de las clases populares es un acontecimiento extraordinario. ¿Qué relación puede haber entre este tipo social y el que encarnan los millones de “condenados de la tierra” en la América Latina contemporánea, que se ganan la vida vendiendo golosinas y baratijas en las intersecciones de las calles, limpiando parabrisas, o como trabajadores ocasionales en labores sin ningún tipo de calificación; que no concurren a la escuela, que jamás visitaron a un médico, que apenas hablan el idioma del país, que viven en casuchas de latas y cartón? Estos ni siquiera reúnen, a finales del siglo XX, las condiciones mínimas como para convertirse en una fuerza de trabajo explotable. La opresión o explotación clasista no es su problema inmediato: éste lo constituye, paradójicamente, su ineptitud para ser explotados. Antes, en las viejas modalidades de acumulación capitalista, la explotabilidad de las masas era universal, como lo prueba el trabajo de los niños.

Además, existía por lo menos un punto de contacto entre burgueses y proletarios: la fábrica. Hoy éste prácticamente ha desaparecido, dada la creciente desindustrialización generada por el auge de la economía de servicios y donde este fenómeno aún no se ha producido por el impetuoso desplazamiento de trabajo vivo por el trabajo coagulado de la máquina, rasgo que ya se advierte con claridad inclusive en los capitalismos latinoamericanos.

El resultado de esta gigantesca reconversión es una sociedad que en realidad no es tal. Es una sociedad, el capitalismo neoliberal de fines de siglo XX, pero a la vez dos sociedades distantes, irreconciliables, extrañas- débilmente articuladas y cuya integración se produce vicariamente y de manera perversa- por la vía fetichizada e ilusoria de la televisión, que así se convierte en un factor de poder excepcional en nuestras sociedades, capaz de “inventar” presidentes y destrozar liderazgos que le son adversos. Al referirse a la polis oligárquica Platón percibió con notable lucidez que cuando gobernaba la plutocracia el resultado era la conformación de dos ciudades, una de pobres y otra de ricos, que coexistían de modo violento y “conspirando sin cesar los unos contra los otros”. En la ciudad oligárquica y las democracias latinoamericanas se han convertido, gracias a la ortodoxia neoliberal, en sociedades que responden a grandes rasgos a esa caracterización clásica de Platón “donde veas mendigos, andarán ocultos ladrones, rateros, saqueadores de templos y delincuentes de toda especie”⁴⁹. Una ciudad de ese tipo, con un “paisaje social” como el descrito más arriba, no constituye precisamente el mejor escenario para el florecimiento de las prácticas democráticas, salvo que con esto simplemente se quiera aludir al respeto ritual de ciertas formalidades que al estar vaciadas de todo contenido carecen por completo de significación. No nos olvidemos que bajo las dictaduras de Stroessner y Somoza había elecciones periódicas; pero, tal como decíamos en la primera parte de este trabajo, la democracia es algo más que eso.

Una sociedad como la que hemos descrito, en donde se ha debilitado hasta grados extremos la integración social y se han disuelto los lazos societales y la trama de solidaridades preexistentes, es también una sociedad en donde las tradicionales estructuras de representación colectiva de los intereses populares se encuentran en crisis. Partidos y sindicatos perciben cómo su eficacia reivindicativa y su credibilidad social son erosionadas por las tendencias desquiciantes del capitalismo neoliberal, que destruye precisamente las arenas en las cuales tanto unos como otros deben desarrollar sus iniciativas. El vaciamiento de la política, crecientemente convertida en un suceso “massmediático” en el cual la televisión reemplaza al ágora, convierte a los partidos en simples sellos de goma privados de toda capacidad de convocatoria y movilización; y la “flexibilización” laboral y la progresiva informalización de los mercados de trabajo destruyen de raíz los fundamentos mismos de la acción sindical. ¿Qué queda, entonces? Queda la estrategia predilecta que el neoliberalismo

impuso a las clases populares: el “sálvese quien pueda”, abdicando de toda pretensión solidaria, de todo esfuerzo colectivo de organización y representación. Es la pulverización del mercado trasladada a la arena política y a las negociaciones obrero patronales, en donde el poderío de los monopolios es incommensurablemente mayor que el de la miríada de débiles actores que, desorganizadamente y de manera egoísta, tratan de encontrar una “solución individual” a los rigores de la explotación clasista. Esta estrategia individualista pasa por la resignación y el sometimiento a las duras (y anteriormente inaceptables) condiciones de explotación incorporadas a los proyectos de “flexibilización” laboral; o por la mendicidad; o por la criminalidad y el narcotráfico. No hay otras escapatorias. Pueden surgir, ocasionalmente y más bien como violentas e intermitentes erupciones, formas de respuesta colectiva que casi invariablemente constituyen expresiones aberrantes como el racismo, la xenofobia, el “nuevo tribalismo” o los fundamentalismos de distinto tipo. Mientras la política de los tardocapitalismos liberales se convierte en un hecho “televisivo”, la protesta social y los movimientos de masas pueden adquirir, en algunos casos, características francamente reaccionarias. En todo este cuadro, como es muy evidente, se evaporan casi por completo la figura del ciudadano y la democracia, y las perspectivas de una ciudadanía participativa y autogobernada y de un capitalismo democrático, al menos en la periferia, se tornan cada vez más problemáticas.

Es cierto: hasta ahora los nacientes regímenes democráticos han sobrevivido a las durísimas condiciones impuestas por la crisis económica, los ajustes estabilizadores y las recomposiciones económicas y sociales puestas en práctica para enfrentarla. Nos parece importante llamar la atención sobre este asunto. Cuando se habla de “ajuste” suele pensarse en políticas de corto plazo, concebidas para corregir momentáneos desequilibrios en las cuentas fiscales o en algunas variables macroeconómicas. Cuando estas políticas duran más de diez años pierden dicho carácter y se convierten en proyectos a veces incoherentes, pero siempre fuertemente coercitivos fundacionales de un nuevo tipo de sociedad. Esto último es precisamente lo que ha ocurrido en América Latina: capitalismo neoliberal, políticas conservadoras, sociedades fragmentadas, marginación de masas, ruptura del tejido social y disgregación de los mecanismos de integración, capitulación de la soberanía nacional, degradación de la política, etc. Todo esto es algo que va mucho más allá de un mero “ajuste”. Y lo más lamentable es que, en la experiencia de nuestro continente, el tránsito de la dictadura a la democracia se realizó manteniendo en lo esencial las mismas políticas económicas que los regímenes dictatoriales implantaron a sangre y fuego. La tarea de reconstrucción social que tenemos por delante es inmensa.

En todo caso, la capacidad de resistencia demostrada por las nuevas democracias latinoamericanas resultó una alentadora sorpresa, sobre todo si se la compara con similares situaciones que, en un pasado no demasiado lejano, produjeron el colapso de los gobiernos civiles. En efecto, coyunturas signadas por desbordes hiperinflacionarios, fuertes tendencias recesivas y/o crisis de balanza de pagos fueron casi invariablemente el prelude del intervencionismo militar. Estas situaciones, naturalmente, potenciaban el activismo de los sectores populares que de este modo desbordaban las frágiles estructuras de intermediación de aquellas democracias, precipitando su colapso. Los casos de Goulart en 1964 e Illia en 1966 son otras tantas muestras de lo que venimos diciendo. En el caso chileno, estos factores también desempeñaron un papel muy importante, agravado por la naturaleza del proyecto socialista puesto en marcha por el gobierno de Salvador Allende.

Sin embargo, sería insensato pensar que las tremendas tensiones a las que se encuentran sometidas las democracias latinoamericanas podrían prolongarse indefinidamente. Una vez rota la secuencia clásica que de la crisis económica remataba en el golpe militar, es posible pensar en otras alternativas distintas, pero no por eso menos amenazantes. En efecto, el problema ya no sería tanto el peligro de una nueva intervención de las fuerzas armadas superflua, toda vez que hoy los encargados de aplicar las políticas impuestas por el gran capital financiero internacional son gobiernos popularmente electos sino el creciente déficit de legitimidad que se derivaría de la incapacidad de los regímenes democráticos para mejorar las condiciones de existencia de las grandes mayorías nacionales y demostrar que la democracia también hace una diferencia en materia de bienestar.

El peligro reside pues en el progresivo vaciamiento de contenidos y propósitos, a resultas del cual la democracia latinoamericana quedaría convertida en una mueca monstruosa de sí

misma, en un reseco cascarón cuya majestuosidad simbólica sería insuficiente para ocultar su tremenda hoquedad. Una democracia "minimalista" no tiene condiciones para hacer frente a los grandes desafíos y a los graves problemas sociales generados por el funcionamiento del capitalismo latinoamericano. La democracia se convertiría en una pura forma, y la vida social regresaría a una situación "cuasi hobbesiana", en la cual la desigual privatización de la violencia y el desesperado "sálvese quien pueda" al cual se verían empujados los indefensos ciudadanos agredidos por el capitalismo salvaje darían lugar a toda clase de comportamientos aberrantes. Este panorama ya es visible, con desigual intensidad, en varias de las nuevas democracias de nuestro continente. El aumento de la violencia y la criminalidad, la descomposición social y la anomia, la crisis y fragmentación de los partidos políticos, la prepotencia burocrática del Ejecutivo, la capitulación del Congreso, la inanidad de la justicia, la corrupción del aparato estatal y de la sociedad civil, la ineficacia del Estado, el aislamiento de la clase política, la impunidad para los grandes criminales y la "mano dura" para los pequeños delincuentes y, last but not least, el resentimiento y la frustración de las masas, constituyen el síndrome de esta peligrosa decadencia institucional de una democracia reducida a una fría gramática del poder y purgada de sus contenidos éticos.

Fernando H. Cardoso sintetizó hace ya unos años los desafíos que debían enfrentar las democracias latinoamericanas, al advertir que existía en nuestras sociedades:

...el sentimiento de la desigualdad social y la convicción de que sin reformas efectivas del sistema productivo y de las formas de distribución y de apropiación de riquezas no habrá Constitución ni Estado de Derecho capaces de eliminar el olor de farsa de la política democrática⁵⁰.

De eso precisamente se trata. De "eliminar el olor de farsa de la política democrática", olor penetrante y que inunda con sus vahos toda la dilatada geografía latinoamericana. Si esto persiste, el futuro de la democracia en esta parte del planeta no puede ser muy alentador, tornando verosímiles las sombrías predicciones acerca del inexorable retorno del péndulo histórico hacia el campo de la dictadura. No comparto para nada ese pesimismo, pero es preciso estar conscientes de los riesgos que corren nuestras democracias. Las demandas generadas en la sociedad civil se multiplican, habida cuenta de las injusticias, privaciones y sufrimientos provocados tanto por la crisis capitalista como por las políticas de ajuste y la recomposición global que le sucedieron, lo cual origina un verdadero aluvión de reivindicaciones que el mercado ni desea ni puede, aunque lo quisiera resolver. Por otra parte, la protesta social encuentra en la democracia un clima tolerante y comprensivo que facilita su propagación. Pero la misma crisis y el modelo de ajuste neoliberal que impulsan las renovadas exigencias de las clases y capas subalternas -víctimas "privilegiadas" del capitalismo salvaje reducen notoriamente las capacidades estatales para producir las políticas necesarias para contrarrestar o compensar los efectos desintegradores de la crisis. Esto da lugar a una alarmante acumulación de contradicciones y antagonismos sociales, incentivados por una institucionalidad democrática que favorece la protesta social de "los de abajo", mientras que las clases dominantes locales y las fuerzas imperialistas coaligadas y parapetadas detrás de las políticas de ajuste sujetan fuertemente las manos del Estado y se esmeran por debilitarlo cada vez más en provecho de sus intereses de clase. El resultado es la ingobernabilidad tendencial del régimen democrático, su acelerada deslegitimización y su probable desestabilización, con los riesgos nada pequeños de una inesperada además de cruenta e indeseada- reinstalación de una dictadura militar de nuevo tipo. Esta sería popularmente plebiscitada por un súbito fervor de fundamentalismo nacional populista, que se posesionaría de las grandes masas pauperizadas por el ajuste y condenadas al infierno de la marginalidad por las democracias capitalistas "realmente existentes" de América Latina. Este es el nuevo peligro, y hay muchos datos concretos en los diferentes países que indican que el riesgo es cada vez mayor. La experiencia del Perú no debería caer en oídos sordos. Sería una trágica paradoja que las víctimas del ajuste capitalista de hoy fuesen impulsadas por su desesperación y desilusión a reinstalar en el poder, esta vez democráticamente, a sus verdugos de ayer. Para evitar este desafortunado desenlace es más que nunca esencial constituir una genuina alternativa de recambio al neoliberalismo dominante. Esa tarea sólo podrá realizarla un conjunto plural de fuerzas de inspiración socialista que sea capaz de reconciliar los ideales fundamentales de justicia, libertad, democracia e igualdad con las necesidades prácticas de reconstrucción económica y social que habrá que emprender ni bien llegue a su término el diluvio neoliberal.

Esa hora no está muy lejana, y si llegamos tarde a la cita, o acudimos a ella sin propuestas concretas y viables, el resultado bien podría ser la inauguración de una época signada por una barbarie de nuevo tipo. Dependerá en gran parte de nosotros que esto no ocurra.

Notas

1 Esta sección resume, en unas pocas páginas, el argumento y la discusión incluidos en nuestro Estado, Capitalismo y Democracia en América Latina, Buenos Aires, Oficina de Publicaciones del CBC-UBA, cp. 7.

2 A. Cueva, El desarrollo del capitalismo en América Latina, México, Siglo XXI, 1976. Sobre el caso del Brasil, véase F. Fernandes, A revolução burguesa no Brasil. Ensaio de interpretação sociológica, Río de Janeiro, Zahar Editores, 1975.

3 Cf. especialmente S. P. Huntington, The Third Wave, Norman and London, The University of Oklahoma Press, 1991.

4 Esta visión minimalista y politicista de la democracia se encuentra en M. A. Garretón, Reconstruir la política. Transición y consolidación democrática en Chile, Santiago, Andante, 1987. También en A. Flisfisch, N. Lechner y T. Moulián, "Problemas de la democracia y la política democrática en América Latina", en AAVV, Democracia y desarrollo en América Latina, Buenos Aires, GEL, 1985. En el volumen colectivo compilado por G. O'Donnell, P. Schmitter y L. Withehead, Transiciones desde un gobierno autoritario, Buenos Aires, Paidós, 1988, se recogen algunos de los mejores trabajos inspirados en esta tradición, aún cuando es justo aclarar que no todos los autores adhieren a sus premisas o dejan de tener serios cuestionamientos hacia ellas. La defensa más sofisticada de esta perspectiva en el ámbito de la ciencia política latinoamericana se encuentra en la obra de C. Strasser, Para una teoría de la democracia posible. Idealizaciones y teoría política, Buenos Aires, GEL, 1990, y Para una teoría de la democracia posible. La democracia y lo democrático, Buenos Aires, GEL, 1991. No obstante, a nuestro juicio, la cuidadosa argumentación de este autor no es suficiente para superar las insanables limitaciones inherentes al enfoque minimalista y politicista de la democracia. Si los más diligentes teólogos medievales fracasaron en su tentativa de demostrar la cuadratura del círculo, ¿cómo hacer para justificar la separación en la teoría de aquello que en la vida real de las sociedades hallamos inextricablemente unido?

5 Cf. J. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, Nueva York, Harper Torchbooks, 1950 (3ra. edición), cps. 20-23.

6 Cf. A. Cueva, Las democracias restringidas de América Latina. Elementos para una reflexión crítica, Quito, Planeta, 1988, p. 12, (destacado en el original).

7 Una excelente crítica de la mistificación en que incurren las corrientes dominantes de las ciencias sociales se encuentra en K. Koscic, Dialéctica de lo Concreto, México, Grijalbo, 1976.

8 K. Marx, "Sobre la Cuestión Judía", en K. Marx y F. Engels, La Sagrada Familia, México, Grijalbo, 1958, pp. 3-38.

9 Guillermo O'Donnell ha planteado con mucha sutileza el problema de estas ciudadanías "incompletas" en su "The State, Democracy, and some Conceptual Problems", en W. C. Smith, C. H. Acuña y E. A. Gamarra, eds., Latin American Political Economy in the Age of Neoliberal Reform, Miami, North-South Center, 1994, pp. 157-169.

10 Agradezco a Paulo Sergio Pinheiro el haberme confirmado la inexistencia de estas palabras en idioma portugués.

11 Recuérdese el intenso debate suscitado por las tesis de Rosa Luxemburgo a propósito de la revolución rusa y sus enseñanzas. Cf. su "The Russian Revolution", en Rosa Luxemburg Speaks, Nueva York, Pathfinder Press, 1970, pp. 365-395, en donde la revolucionaria polaca advierte las implicaciones autoritarias de largo plazo de ciertas decisiones tornadas en los meses iniciales de la revolución rusa. Casi veinte años antes, en su célebre contribución al

Bernstein-Debate, Luxemburgo había planteado en Reforma o Revolución -reproducida en Obras Escogidas, Tomo I, México, ERA, 1978 una aguda defensa de la democracia como componente imprescindible del proyecto socialista. Una formulación actual de esta tesis se encuentra en Raymond Williams, "Hacia muchos socialismos", en El Cielo por Asalto, Año 1, N2 3, 1991.

12 N. Bobbio, "Quali alternative alla democrazia rappresentativa?", en F. Coen, Il marxismo e lo Stato. Il dibattito aperto nella sinistra italiana sulle tesi di Norberto Bobbio, Roma, Mondoperaio, 1976, pp. 19-37.

13 R. Luxemburgo, "The Russian Revolution", op. cit., pp. 393-395.

14 Sobre el tema del compromiso de clases en el Estado keynesiano ver, entre otros: C. Offe, Contradictions of the Welfare State, Cambridge, Mass., MIT Press, 1984, y del mismo autor, Disorganized Capitalism, Cambridge, Mass., MIT Press, 1985; A. Przeworski, Capitalism and social democracy, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.

15 C.B. Macpherson, The political theory of possessive individualism. Hobbes to Locke, Londres, Oxford University Press, 1962; y también su The life and times of liberal democracy, op. cit., pp. 23-43. Véase también la sugerente sistematización efectuada -tras las huellas de Macpherson- por David Held, Models of Democracy, op. cit., y la obra de C. Pateman, Participation and Democratic Theory, op. cit.

16 Calculado sobre la base de informes varios de la CEPAL y el Banco Mundial.

17 Sobre este tema, consultar los clásicos trabajos de G. O'Donnell, Modernization and bureaucratic authoritarianism. Studies in South American politics, Berkeley: Institute of International Studies, University of California, 1979, y F. H. Cardoso, Autoritarismo e Democratização, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1975.

18 Una sugerente discusión sobre el auge y la crisis de los modelos de acumulación "estadocéntricos" puede verse en L. Paramio, "El final de un ciclo y la crisis de unos actores: América Latina ante la década de los '90", ponencia presentada al XVI Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Ciencia Política, Buenos Aires, julio de 1991; véase también R. Lagos, "Crisis, ocaso neoliberal y el rol del Estado", en Pensamiento Iberoamericano, N° 25 a, enero-junio de 1984, pp. 163-188, y M. Cavarozzi, "Beyond transitions to democracy in Latin America", ponencia presentada al XV Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Ciencia Política, Buenos Aires, julio de 1991.

19 Una estimulante recopilación de trabajos sobre estos temas puede verse en D. Muchnik, Economía y Vida Cotidiana en la Argentina, op. cit., y en A. Bocco y N. Minsburg (comps.), Privatizaciones. Reestructuración del Estado y la Sociedad. Del Plan Pinedo a "los Alsogaray", Buenos Aires, Letra Buena, 1991.

20 O. Sunkel, "La crisis social en América Latina. Una perspectiva neoestructuralista", en C. Contreras Quina (comp.), El Desarrollo Social. Tarea de Todos, Santiago, Comisión Sudamericana de Paz, Seguridad y Democracia, 1994, p. 38.

21 Fuente: PNUD, Desarrollo sin pobreza, Documento de Trabajo preparado para la IIª Conferencia Regional sobre la Pobreza en América Latina y el Caribe, Santiago, 17-19 de octubre, 1990, p. 45 e. Entre 1991 y 1993, según la CEPAL el PBI per cápita creció a un promedio del 1,4% anual, es decir, apenas una décima de un uno % de lo mínimo necesario para satisfacer las modestas exigencias del escenario optimista! Cf. CEPAL, Cepal News, Washington, CEPAL, Vol. XV, N° 1, enero de 1995.

22 Cf. CEPAL, Transformación productiva con equidad, Santiago, 1990.

23 Una visión contraria a la nuestra se encuentra en K. L. Remmer, "The political impact of economic crisis in Latin America in the 1980's", en American Political Science Review, Vol. 85, N° 3, septiembre de 1991, pp. 777-800.

24 Ver cifras en A. Boron, Estado, Capitalismo y Democracia en, América Latina, op. cit., pp. 223-228.

25 CEPAL, Transformación productiva... op. cit. , p. 95. En el caso argentino, en el período 1992-94 el gasto público descendió aún más, al 27%, pero el gobierno insiste en que todavía es muy elevado.

26 World Bank, World Development Report, 1991. The Challenge of Development, Oxford, Oxford University Press, 1991, p.139.

27 Interrogado por los periodistas en ocasión de una de las tantas marchas de los jubilados demandando una mejora de sus haberes, el ministro Domingo Cavallo comentó urbi et orbi que él no podía vivir con menos de diez mil dólares al mes. Pese a ello se mantuvo firme en su posición de negar un aumento a los pensionados que ganaban entre 140 y 150 pesos mensuales.

28 Cf. CEPAL, Equidad y Transformación Productiva. Un Enfoque Integrado, Santiago, CEPAL, 1992, p. 92.

29 Equidad y transformación productiva... op. cit. p. 92.

30 Cf. J. J. Santiere, Informe sobre la estructura tributaria argentina, Buenos Aires, Banco Mundial, 1989.

31 Cf. R. Carciofi, La desarticulación del pacto fiscal. Una interpretación sobre la evolución del sector público argentino en las dos últimas décadas, Buenos Aires, CEPAL, Doc. de Trabajo N° 36, 1990.

32 Cf. C. Offe, Contradictions of the Welfare State, Cambridge, MIT Press, 1984, y Disorganized Capitalism, Cambridge, MIT Press, 1985. Véase asimismo L. Paramio, Tras el Diluvio. La izquierda ante el fin de siglo, Madrid, Siglo XXI, 1988; A. Przeworski, Capitalismo y Socialdemocracia, Madrid, Alianza, 1988; E. Isuani, R. Lo Vuolo y E. Tenti Fanfani, El Estado Benefactor: un paradigma en crisis, Buenos Aires, Miño, Dávila CIEPP, 1991.

33 Sobre el tema de los "regímenes económicos internacionales" ver la antología editada por S. D. Krasner (comp.), International Regimes, Ithaca, Cornell University Press, 1983, y, del mismo autor, Structural Conflict. The Third World against Global Liberalism, Berkeley, University of California Press, 1985; R. W. Cox, Production, power and world order: social forces in the making of history, Nueva York, Columbia University Press, 1987; R. O. Keohane, After Hegemony: cooperation and discord in the world political economy, Princeton, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1984; S. Strange, States and Markets, London & New York, Pinter Pub. (segunda edición), 1994. Por último, ver nuestra "Towards a post-hegemonic age? The end of Pax Americana", en Security Dialogue, Vol. 25 (2), 1994, pp. 211-221.

34 O. Altimir, Cambios en las desigualdades de ingreso y en la pobreza en América Latina, Buenos Aires, Instituto Torcuato Di Tella, 1992, apéndice C-1.

35 Cf. CEPAL, Transformación productiva con equidad, op. cit., p. 22. Sobre la cuestión del igualitarismo ver R. Blackburn, "Fin de Siècle: Socialism after the Crash", en New Left Review, Londres, N°185, enero-febrero de 1991. Los datos sobre Chile fueron tomados de P. Meller, "Adjustment and Equity in Chile", París, OECD, 1992, p. 23.

36 L. C. Bresser Pereira, "Efficiency and Politics" p. 26. Los datos sobre Chile también provienen de P. Meller, "Latin American adjustment and economic reforms: issues and recent experience", CIEPLAN (junio 1992), y de CEPAL, "Notas" op. cit., p. 45.

37 La Utopía Desarmada, Buenos Aires, Ariel, 1993, p.284. Véase asimismo M. Délano y H. Traslaviña, La herencia de los Chicago-boys, Santiago, Ornitorringo, 1989; E. Tironi, Los silencios de la revolución, Santiago, Puerta Abierta, 1988, y X. Arrizabaló Montoro, Resultados

económicos de la dictadura en Chile (1973-1989), Doc de Trabajo 1-93 del Instituto Internacional del Desarrollo.

38 Cf. O. Altimir, op. cit.

39 L. C. Bresser Pereira, op. cit.

40 Cf. J. Castañeda, op. cit., pp. 283-284. Como si lo anterior fuera poco el presidente Zedillo formuló reiteradas declaraciones en las que aseguraba que en esta nueva “vuelta de tuerca” del ajuste neoliberal exigida por el desplome de la economía mexicana “el costo principal será pagado por los más pobres”.

41 S. Edwards, América Latina y el Caribe. Diez años después de la crisis de la deuda, Washington, Banco Mundial, 1993, pp. 34-35.

42 Hemos explorado detalladamente estas cuestiones en nuestro Estado, Capitalismo y... op. cit., cps. 2, 3 y 7. Ver, por supuesto, los dos trabajos pioneros y fundamentales de C. B. Maepheron, *The Political Theory of Possesive Individualism*, Oxford, Oxford University Press, 1962, y *Democratic Theory. Essays in Retrieval*, Oxford, Oxford University Press, 1973.

43 En esta sección seguimos nuestro “El experimento neoliberal de Carlos Saúl Menem”, en *El Cielo por Asalto*, Buenos Aires, III, N° 6, 1993.

44 El locus classicus de este tema es, por supuesto, M. Weber, *The protestant ethic and the spirit of Capitalism*, London, Unwin, 1985.

45 L. C. Bresser Pereira, J. M. Maravall y A. Przeworski, “Reformas económicas en las nuevas democracias. Un enfoque socialdemócrata”, en *El Cielo por Asalto*, III, Otoño 1993, N° 5, p. 14 (énfasis nuestro).

46 D. Bell, *Las contradicciones culturales del capitalismo*, Madrid, Alianza Universidad, 1985.

47 Cf. A. Gorz, *Critique of economic reason*, Londres, Verso. 1989.

48 J. Rifkin, *The end of work*, Nueva York, G. P. Putnam's Sons, 1995.

49 Platón, *La República*, Buenos Aires, EUDEBA, 1985, par. # 552 d.

50 F. H. Cardoso, “La democracia en América Latina”, en *Punto de Vista*, N° 23, Buenos Aires, abril de 1985.